¿ES NECESARIO UN MODELO PROPIO DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL EN ESPAÑA PARA PARTIDOS POLÍTICOS?: UN ANÁLISIS JURÍDICO EN BASE AL DERECHO INTERNO Y COMPARADO

Miguel Ángel Morales Hernández

Investigador Posdoctoral «Margarita Salas»
Departamento Derecho Penal de la Universidad de Granada

Title: *Is there a need for a specific model of attribution of criminal liability in Spain for political parties? An legal analysis based on domestic and comparative law.*

Resumen: A través de la LO 7/2012 el legislador penal español decidió introducir a los partidos políticos en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a pesar de que inicialmente los había excluido. No obstante, el modelo para atribuir un delito a este tipo de entidades es el mismo que para el resto de personas jurídicas. Así, en este trabajo de investigación, se ponen de manifiesto las importantes problemáticas dogmáticas que provoca el hecho de extender de forma genérica a las organizaciones políticas el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se llega a la conclusión, de la necesidad de introducir un modelo propio de atribución de responsabilidad criminal para este tipo de entidades en nuestro país que atienda a sus propias peculiaridades en relación al ámbito subjetivo de aplicación, delitos susceptibles de poder ser cometidos por éstas, personas físicas competentes para realizar los ilícitos penales, penas a imponer y requisitos de los «criminal compliances».

Palabras Clave: Partidos Políticos; Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; Derecho Comparado; Teoría del Hecho de Conexión, Penas, *Criminal Compliance*.

Abstract: *Through LO 7/2012, the Spanish criminal legislator decided to introduce political parties into the scope of the criminal liability of legal*

persons, despite the fact that it had initially excluded them. However, the model for attributing a crime to this type of entity is the same as for other legal persons. Thus, this research work highlights the important dogmatic problems caused by the generic extension of the current model of criminal liability of legal persons to political organizations. It concludes that there is a need to introduce a specific model for attributing criminal liability to this type of entity in our country that takes into account its own peculiarities in relation to the subjective scope of application, the crimes that can be committed by them, the natural persons competent to commit the criminal offences, the penalties to be imposed and the requirements of the criminal compliances.

Keywords: *Political Parties; Criminal Liability of Legal Entities; Comparative Law; Connection Fact Theory; Penalties, Criminal Compliance.*

Sumario: 1. La inclusión de los partidos políticos en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y primeras investigaciones judiciales en esta materia. – 2. La extensión del modelo actual de responsabilidad penal de las personas jurídicas al particular caso de un partido político: principales aspectos controvertidos. – 2.1. ¿A qué clase de organización política se puede llegar a imputar responsabilidad penal como persona jurídica? – 2.2. Un catálogo de delitos extendido a partidos políticos pero concebidos para perseguir la delincuencia de naturaleza empresarial – 2.3. La doble vía de imputación de responsabilidad criminal establecida en el art. 31 bis.1 CP: principales lagunas de punibilidad que pueden llegar a producirse. – 2.3.1. En relación a la letra a) del art. 31. bis.1. CP. – 2.3.2. En lo concerniente a la letra b) del art. 31 bis.1 CP. 2.3.3. El requisito del beneficio directo o indirecto aplicado a una organización política. – 2.4. Las sanciones a imponer a un partido político responsable de un delito corporativo: algunas cuestiones problemáticas. – 2.5 El genuino diseño de «criminal compliances» para formaciones políticas españolas: insuficientes requisitos normativos – 3. Las peculiaridades que presenta la responsabilidad penal de los partidos políticos en determinados países de nuestro entorno. – 3.1. El caso francés. – 3.2. El caso austriaco. – 3.3. El caso rumano. – 3.4. El caso croata – 4. ¿Se debe admitir que los partidos políticos españoles puedan ser responsables de delitos como personas jurídicas? – 4.1. Los argumentos doctrinales en contra de su inclusión. – 4.2. Toma de postura: la existencia de sólidos argumentos doctrinales a favor de su inclusión. 5. Conclusiones y propuestas de *lege ferenda*.

1. La inclusión de los partidos político españoles en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y primeras investigaciones judiciales en esta materia

La LO 5/2010, de 22 de junio, trajo consigo como destacada novedad la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro principal texto punitivo en un intento más por parte del legislador español de combatir eficazmente la delincuencia económica organizada¹ quedando, sin embargo, excluidos de la misma, entre otros, los partidos políticos² en virtud de lo establecido en el art. 31 bis, apartado quinto, CP³. No obstante, la referida situación cambia a raíz de la aprobación de la LO 7/2012, de 27 de diciembre, —una reforma penal que, en realidad, fue resultado de la enmienda núm. 21 presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comisión de Justicia que se convocó en el año 2012⁴— permitiéndose a partir de ella, ya sí, declarar responsable a un partido político por un delito corporativo.

¹ Vid., en este sentido, Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2008, pp. 34-35. Vid, también, Marín de Espinosa Ceballos, E. B., *Criminalidad de empresa. La responsabilidad penal en las estructuras jerárquicamente organizadas*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, pp. 16-17 y 37-40. Vid, además, Valls Prieto, J., «Las exenciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿son responsables los partidos políticos y los sindicatos?», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 104, 2011, p. 116.

² Vid., no obstante, Zugaldía Espinar, J. M., «La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 11, 2014, p. 367, quien llegó a señalar que esta exclusión no era en modo alguna absoluta o total, puesto que «tanto respecto de los partidos políticos como de los sindicatos, su exclusión del ámbito de los posibles sujetos del Derecho Penal se podía explicar cuando actuaran «hacia el exterior», esto es, cumplimiento su función constitucional (¡también la inviolabilidad de los parlamentarios exige que estén en el ejercicio de sus funciones!)», advirtiendo no obstante este autor que «no podía decirse los mismo cuando los partidos políticos o los sindicatos actuaran «hacia el interior», esto es, para hacer posible su propio funcionamiento y financiación», una situación, por tanto, ésta en la que sí cabría responsabilidad penal en estas organizaciones».

³ Así, se establecía en el párrafo primero de este precepto en cuestión que «las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía administrativa o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas que presten servicios de interés económico general», añadiéndose eso sí en su apartado segundo que «en estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal».

⁴ En ella, este Grupo Parlamentario advertía que el hecho de excluir a los partidos políticos del listado de personas jurídicas penalmente responsables: «constituye un

En este sentido, el que el legislador español a través de la citada reforma penal admitiera a las formaciones políticas atribuirles el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, parece ser resultado del interés de aquél en poder imputar a éstas diversos ilícitos penales vinculados con el fenómeno de la corrupción⁵. De esta manera se señaló en el preámbulo de la ley que modificó en este sentido el Código Penal, llegándose a afirmar al respecto que «*se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se contenía en la excepción regulada en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal. De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación*»⁶. Además, tal y como la doctrina señala, a ello hay que sumar que la reforma penal de 2012 puede ser interpretada como la respuesta dada por el legislador debido a las investigaciones judiciales que involucraban a un número importante de integrantes de diversos partidos políticos como también a la preocupación que se estaba generando en torno a esta cuestión⁷.

En consecuencia, desde la entrada en vigor de esta reforma, el 17 de enero de 2013, un partido político español puede llegar a ser declarado responsable de determinados delitos como persona jurídica, puesto que las únicas exclusiones que en la actualidad se siguen contemplando en relación a este régimen de responsabilidad son exclusivamente las del art. 31 quinquies CP⁸. De hecho, ya se han llevado a producir varios pro-

---

privilegio injustificado que no colabora en absoluto a la regeneración democrática ni a combatir la corrupción política de nuestro país, que lejos de disminuir sigue aumentando día a día (...) La inclusión de los partidos políticos y sindicatos en el régimen general de responsabilidad penal previsto en el Código Penal, colaboraría de forma importantísima a la persecución y erradicación de la corrupción política, prestigiando la política y, por ende, la calidad de nuestra democracia».

⁵ De esta manera lo señala Sandoval Coronado, J. C., «Capítulo VII. Apuntes sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos, la corrupción política, y la disolución de la persona jurídica», en Juanatey Dorado, C., Sánchez-Moraleda Vilches, N. (dirs.), *Derechos del condenado y necesidad de pena*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi Thomson Reuters, 2018, p. 145. Se afirma aquí que «no parece aventurado considerar que la aplicación del sistema de RPPJ a los partidos políticos obedeció al interés del legislador por exigirles responsabilidad por delitos relacionados con la corrupción».

⁶ Vid. Apartado II del Preámbulo de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

⁷ De esta forma lo señala Sandoval Coronado, J. C., ob. cit., p. 145. En este sentido, con los datos que proporciona el Centro de Investigaciones Sociológicas, podemos observar cómo efectivamente se produjo una tendencia ascendente desde enero de 2012 de la «corrupción y el fraude» como uno de los principales problemas de los ciudadanos españoles. Disponible en https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html (consultado el 27.07.2022).

⁸ En este sentido, establece el actual art. 31 quinquies CP que «1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado,

cedimientos para exigir responsabilidad criminal a esta clase de entidades: a) así, en primer lugar, hemos de destacar la imputación que sufrió el Partido Popular (PP) por un delito de daños informáticos a través del Auto del Juzgado de Instrucción núm. 32 de Madrid de julio de 2016⁹, si bien finalmente se produjo la absolución del mismo¹⁰; b) en segundo lugar, también se ha producido la imputación de este mismo partido político por un delito de blanqueo de capitales con objeto de investigar determinadas donaciones hacia el mismo que tendrían supuestamente un origen ilícito¹¹; c) en tercer lugar, queremos destacar además la investigación del partido político Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y como continuador de éste, también del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat,) por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias¹²; d) en cuarto lugar, también se ha llegado a imputar en el año 2020 al partido político Podemos como persona jurídica por posible malversación y administración desleal¹³; e) por último, igualmente se ha llegado a investigar al PP de Salamanca por un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos en el año 2021¹⁴.

---

a la Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas».

⁹ Vid., a este respecto, por un lado, Auto del Juzgado de Instrucción núm. 32 de Madrid, de 26 de julio de 2016, en el que se atribuía como responsable de un posible delito de daños informáticos al PP, y, por otro lado, el Auto de la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 909/2017, de 3 de noviembre, que ratificó dicha imputación. En relación a esta cuestión vid. León Alapont, J., «La primera imputación de un partido político en España ex artículo 31 bis del Código Penal», *Diario La Ley*, n. 9107, 2017.

¹⁰ Vid. Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 31 de Madrid, núm. 267/2019, de 4 de septiembre de 2019.

¹¹ Vid, en este sentido, León Alapont, J., *La responsabilidad penal de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 171-172. Vid., también, De Pablo Serrano, «La responsabilidad penal de los partidos políticos: delitos, penas y Compliance Programms», en F. J. Matia Portilla (dir.), *Problemas actuales sobre el control de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, p. 344.

¹² Vid., Razonamiento Jurídico Tercero del Auto del Juzgado Central de Instrucción de 27 de julio de 2018.

¹³ Se trata ésta de una decisión tomada por el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, tras la declaración presentada por el exabogado del partido José Manuel Calvente quien señaló irregularidades en este partido político en la contratación de una empresa de comunicación para las elecciones, «*Neurona Consulting*», y, también, en la llamada caja de solidaridad. Disponible en https://www.lasexta.com/noticias/nacional/imputan-a-podemos-como-persona-juridica-en-la-investigacion-sobre-la-financiacion-del-partido_202008115f32d28526765300016e89ec.html (consultado el 06.09.2022).

¹⁴ Así, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Salamanca acordó la práctica de diferentes diligencias de instrucción e investigación «al existir indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partidos políticos previsto y penado en el artículo 304 bis, apartados 1 y 5, del Código Penal». Disponible en https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20211124/imputa-presunta-financiacion-pp-salamanca-javier-iglesias/629687397_0.html (consultado el 06.09.2022).

Por todo ello, cabe plantearnos si la decisión que finalmente decidió adoptar el legislador penal español, de extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos, ha sido un acierto o, en cambio, un total desatino, teniendo en cuenta que ello se ha producido, además, sin que se haya establecido en la regulación penal alguna matización en relación a este tipo de entidades. Y es que, si nos paramos a pensarlo, se trata ésta efectivamente de una cuestión especialmente polémica puesto que, en realidad, la actual configuración de esta clase de responsabilidad penal fue concebida para perseguir una criminalidad de índole económica, la que se origina en el seno de las empresas, y no para combatir la que se puede llegar a producir en otros tipos de personas jurídicas. En este sentido, se hace imprescindible realizar un exhaustivo análisis de esta materia, teniendo en cuenta no sólo la regulación interna sino también el derecho comparado, el cual nos proporcionará sin duda, las claves que nos permitan dar una respuesta completamente satisfactoria en torno a esta cuestión.

2. La extensión del modelo actual de responsabilidad penal de las personas jurídicas al particular caso de un partido político: principales aspectos controvertidos

Cuando el legislador español decidió incluir a los partidos políticos en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no introdujo, en cambio, ningún matiz para esta clase de organizaciones en la regulación, siendo esta decisión sumamente controvertida por los importantes problemas dogmáticos que ello puede generar, tal y como vamos a pasar a continuación a exponer.

2.1. ¿A qué clase de organización política se puede llegar a imputar responsabilidad penal como persona jurídica?

Una primera cuestión controvertida en esta materia implica determinar a qué clase de organizaciones políticas se les podría exigir responsabilidad penal en caso de ser declaradas responsables de algún delito. Hay que tener presente, a este respecto, que existe en el ordenamiento jurídico español una variada normativa que regula diversos tipos de organizaciones políticas: a) así, por un lado, el art. 1.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP) señala que «*los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes*»; b) por otro lado, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) en cuyo art. 44. 1 se dispone que pueden presentar candida-

tos o listas de candidatos «*las coaliciones constituidas según lo dispuesto en el apartado siguiente*» —letra b)— y «*las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos establecidos por las disposiciones especiales de la presente ley*» —letra c)—.

Respecto a esta cuestión, coincidimos con la doctrina cuando señala que, para poder exigir responsabilidad penal a una persona jurídica en base a lo contenido en los arts. 31 bis y ss. CP, un primer elemento legal esencial —que puede ser denominado presupuesto o ámbito subjetivo— es poseer necesariamente personalidad jurídica¹⁵. En este sentido, tal y como señala Zugaldía Espinar:

«los nuevos sujetos pasivos del proceso penal, potenciales responsables de ilícitos de esa naturaleza, son las personas jurídico privadas de Derecho Civil y Mercantil y algunas personas jurídicas públicas, constituyendo la ostentación de personalidad jurídica un primer filtro en este sentido, de modo que para aquellos otros *entes colectivos que carezcan de personalidad jurídica*, se ha previsto un régimen diverso, de aplicación potestativa —en el art. 129 CP»¹⁶.

Así, tenemos que tener presente que, en virtud de lo establecido en el apartado cuarto del art. 3 LOPP, esta clase de organizaciones «*adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa presentación en aquel del acta fundacional suscrita por sus promotores, acompañada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley Orgánica*». Por ello, por mor del citado precepto, la personalidad jurídica de esta clase de organizaciones la va a determinar su correcta inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior¹⁷.

La anterior afirmación nos lleva a mostrarnos en desacuerdo con autores como Santana Vega, quien argumenta que, en el caso de las federaciones, coaliciones y uniones de partidos, al tratarse éstas de superestructuras no se les podrá imputar directamente responsabilidad criminal, debiéndose, por tanto, determinar, en el caso de que se cometa un delito en el seno de los mismos, a qué partido o partidos pertenecen las citadas superestructuras, y así imputarles a estos últimos el mismo¹⁸. En

¹⁵ González Cussac, J. L., *Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, p. 97.

¹⁶ Vid., en este sentido, Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin personalidad y de sus directivos. Análisis de los arts. 31 bis y 129 del Código Penal*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 98-99.

¹⁷ Coincidimos, por tanto, con León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., pp. 192-193 cuando explica que «para poder hablar de partidos políticos, en sentido técnico-jurídico, debe haber superado con éxito el proceso de inscripción en el Registro de Partidos, tras lo cual adquirirá personalidad jurídica».

¹⁸ Santana Vega, D. M., «Consideraciones críticas sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos como instrumento de lucha contra la corrupción», en J. Rodríguez-

este sentido, hay que tener en cuenta que la LOPP, en su art. 1.3, señala que «*los partidos políticos podrán inscribir federaciones, coaliciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo de sus órganos representantes*», y también que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP), cuando se refiere al ámbito de aplicación de esta ley, dispone que «*a los efectos de esta Ley la expresión «partido político» comprenderá, en su caso, al conjunto de entidades mencionadas anteriormente*» (párrafo segundo del art. 1), señalándose precisamente ahí también a federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. Por ende, a nuestro juicio, sí que sería posible imputar directamente responsabilidad criminal a este tipo de organizaciones políticas, pero para ello, habría que comprobar previamente que estén efectivamente inscritas en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior.

Pero, en otro orden de cosas, cabe preguntarnos qué sucede cuando un partido político cuenta con diferentes estructuras a nivel autonómico, provincial, local o comarcal¹⁹, un hecho éste, por otro lado, muy habitual es nuestro país, especialmente en aquellos partidos políticos nacionales más votados. En relación a ello, la solución pasa a ser de nuevo la de comprobar el Registro de Partidos Políticos, de tal forma que si estas subunidades están allí correctamente inscritas serán éstas a las que se les pondrá imputar directamente responsabilidad criminal. En cambio, en lo que respecta a los grupos parlamentarios y grupos locales o municipales, a ellos no sería posible imputarles responsabilidad criminal como personas jurídicas conforme a lo regulado en los arts. 31 bis y ss. CP, al no ser posible la inscripción de aquellos en el Registro de Partidos.

En definitiva, y como corolario de todo lo anterior, podemos señalar que cuando exista una inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior, y se cumplan los requisitos contenidos en los arts. 31 bis y ss. CP, una organización política—incluida una superestructura o una subunidad territorial— podrá llegar a ser declarada penalmente responsable como persona jurídica de un determinado ilícito penal. Así, en caso de que no exista esta inscripción en el citado registro administrativo, la imputación de responsabilidad criminal no podrá darse, pudien-

---

Drincourt (dir), *Transparencia, profundización democrática y lucha contra la corrupción*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2019, p. 333.

¹⁹ León Alapont, J., «¿A qué «partido político» imputar y eventualmente condenar?», *Revista Penal*, n. 40, 2017, p. 147. Explica este autor aquí que «la «estructura territorial» que presentan algunos partidos puede suponer un auténtico desafío a la hora de determinar a qué partido atribuir la responsabilidad criminal». Se continúa argumentando aquí que «la discusión girará en torno a si «a efectos penales» sólo se puede imputar o condenar a un partido que haya adquirido tal estatus por su inscripción en el Registro de Partidos o, también, ¿a una parte de éste de darse las circunstancias que más adelante se expondrán (bien mediante el sistema de los arts. 31 bis y ss. CP o en virtud del art. 129 CP)?» (pp. 147-148).

do responder eso sí la organización política a la que aquella pertenezca. Ello provoca que determinadas subunidades de una formación política o determinadas superestructuras no puedan ser directamente sancionadas, lo cual supone un aspecto muy mejorable de la regulación. La única excepción a la anterior regla, a nuestro juicio sería la de una determinada organización política que haya obtenido la personalidad jurídica por otra vía diferente como puede ser por haberse constituido conforme a lo establecido en el art. 35. 2º del Código Civil (CC)²⁰ o por mor de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación debiéndose en estos casos comprobar, tal y como señala León Alapont, que exista «escritura pública o privada de constitución o, aunque no se exija, esté inscrita en el registro de asociaciones». En tal caso, esta formación política, como asociación, también quedaría sometida al régimen de los arts. 31 bis y ss. CP²¹.

2.2. *Un catálogo de delitos extendido a los partidos políticos pero concebidos para perseguir la delincuencia de naturaleza empresarial*

El legislador español, al configurar el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha optado por diseñar un sistema de «numerus clausus» de delitos, de tal forma que únicamente aquellos ilícitos penales que expresamente prevean esta posibilidad podrán llegar a ser imputados a una persona jurídica²². En este sentido, como señala Cortés Labadía:

«las personas jurídicas no pueden incurrir en responsabilidad penal por cualquier delito, sino que se articula un sistema en el que se incluye un listado cerrado de figuras delictivas donde la posible intervención de la persona jurídica se hace más evidente»²³.

No obstante, la inclusión de los partidos políticos en esta clase de responsabilidad tampoco ha implicado el establecer para éstos algún tipo de especialidad en el diseño de este listado de delitos, por lo que, *a priori*, cualquier ilícito penal que admita la responsabilidad penal de las perso-

²⁰ Se establece en el art. 35. 2º CC que son personas jurídicas «*las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad jurídica, independiente de la de cada uno de sus asociados*».

²¹ En este sentido lo señala León Alapont, J., «¿A qué «partido político» imputar...», cit., p. 162.

²² En este sentido, se indica en el art. 31 bis CP «*en los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables*». Igualmente, en la Exposición de Motivos, apartado VII, de la LO 5/2010 se señala que «*esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea*».

²³ Vid., en este sentido, Camacho Vizcaíno, A., Cortés Labadía, J. P., «Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas», *Diario La Ley*, n. 8586, 2015, p. 3.

nas jurídicas, podrá llegar a ser imputado a una organización política. Sin embargo, a este respecto, hay que tener presente, tal y como señala De Pablo Serrano, que «todas las personas jurídicas poseen especificidades y particularidades que las convierten en únicas y las distinguen de las demás, rasgos que les aproximan a unos delitos y les alejan de otros»²⁴. De hecho, esta afirmación va a ser especialmente relevante para el particular caso de las formaciones políticas, puesto que es cierto que éstas pueden sin lugar a dudas llegar a ser declaradas responsables de una gran variedad de delitos —todos los que admitan esta clase de responsabilidad—, pero en realidad la probabilidad de comisión de aquellos variará respecto de otras personas jurídicas, todo ello por las genuinas actividades que estas organizaciones políticas desarrollan.

Efectivamente, en primer lugar, dentro del sistema «*numerus clausus*» de delitos que rige para el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, podemos considerar que determinados ilícitos penales van a ser los que con mayor probabilidad serán cometidos por los partidos políticos puesto que éstos, en virtud de lo establecido en el art. 6 del texto constitucional, «*expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamental para la participación política*». Por tanto, el principal riesgo de actividad delictiva por parte de estas entidades vendrá dado por la comisión de una serie de delitos que, como acertadamente ha expresado la doctrina, representan el núcleo de las actividades ilegales de este tipo de organizaciones en su búsqueda de fuentes de financiación, favores o recompensas ilegales²⁵, todo ello esencialmente en aras de obtener una determinante ventaja frente a sus competidores. Estamos, sin duda, aquí haciendo referencia a la alta probabilidad de que en el seno de una organización política se cometan, entre otros muchos, delitos de financiación ilegal de los partidos políticos²⁶, delitos contra la administración pública

---

²⁴ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 350. Vid., también a este respecto, León Alapont, J., «El delito de financiación ilegal de los partidos políticos desde la perspectiva de la responsabilidad penal de éstos como personas jurídicas», *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, n. 4, 2018, p. 3.

²⁵ Vid, en este sentido, De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 353.

²⁶ Sobre las limitadas conductas que se castigan a través del art. 304 bis CP vid. Morales Hernández, M. A., «Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia, Alemania y Reino Unido», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 136, 2022, pp. 276-283. Vid, también en este sentido, Morales Hernández, M. A., «Particularidades en materia de autoría y participación en los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos», *La Ley Penal*, n. 149, p. 11. Se señala aquí en relación al art. 304 bis CP que la admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas pone de manifiesto importantes problemas en materia de autoría y participación. Y es que, por un lado, «cuando determinados sujetos realicen la conducta delictiva del apartado primero, es posible que no se dé el hecho de conexión, resultando la formación finalmente impune». Por otro lado, «tampoco resultaría posible, por ejemplo, el castigo como autoras inmediatas de un delito de financiación pasiva en el caso de personas jurídicas interpuestas que tengan como fin el intentar financiar de forma indirecta a determinadas formaciones políticas, como

o delitos de blanqueo de capitales²⁷, si bien es cierto que en relación a los delitos vinculados a la corrupción política se han producido importantes «olvidos» por parte del legislador español²⁸.

En segundo lugar, otro bloque de ilícitos penales estará vinculado a la inevitable actividad que tienen los partidos políticos en el tráfico jurídico, si bien su riesgo de comisión será en este caso menor²⁹. Estamos aquí haciendo referencia a un conjunto de infracciones penales tales como los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, los delitos de frustración en la ejecución, los delitos relativos a las insolvencias punibles o los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, etc.

Por último, existe un tercer bloque de delitos, cuya probabilidad de comisión por parte de las organizaciones políticas puede ser considerado como bajo o muy bajo al no tener nada que ver éstos con la actividad que las formaciones políticas desarrollan, además de que muchos otros ilícitos penales no podrán ser imputados a éstos, por no estar previstos en el sistema de numerus «clausus» que rige en este ámbito³⁰. Y es que, en este sentido, como señala De Pablo Serrano, «en cada caso concreto, habrá que atender entonces a la naturaleza del hecho delictivo para decidir si se trata de una actividad que pueda ser realizada por partidos políticos»³¹.

---

ocurre en el caso de las fundaciones u otras entidades vinculadas a los partidos políticos», existiendo «aun incertidumbre de que estas personas jurídicas pudieran ser castigadas a título de participación, pues (...) la Teoría Jurídica del Delito Corporativo está aún por construir».

²⁷ Vid., en este sentido, Del Moral García, A., «Responsabilidad penal de partidos políticos» en *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín*, Madrid, Fiscalía General del Estado, 2018, p. 313, quien argumenta que «si repasamos ese listado pensando en un partido político tendremos que los delitos que resultan más connaturales con sus características específicas serían los de descubrimiento y revelación de secretos; la financiación ilegal de partidos políticos; por supuesto; el blanqueo de capitales; y el tráfico de influencias».

²⁸ Vid., en este sentido, Santana Vega, D. M., ob. cit., p. 337, quien afirma que «las sucesivas reformas del Código penal han extendido la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los delitos relativos a la corrupción (cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos), pero se ha dejado fuera otras figuras delictivas como el tipo de negociaciones prohibidas».

²⁹ Vid., en este sentido, Del Moral García, A., ob. cit., p. 313, quien señala que «un segundo bloque vendría constituido por los delitos económicos vinculados al ámbito empresarial en relación a la actividad de esa naturaleza (no estrictamente política) de un partido (alquiler de locales, pagos debidos, condición de empleador...)».

³⁰ Vid., a este respecto, Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas...*, cit., p. 303, quien hace hincapié en la ausencia de ciertos delitos para las personas jurídicas como los «delitos societarios, los de receptación, el homicidio y las lesiones por imprudencia (accidentes laborales), los delitos contra el control de cambios o el delito de quebrantamiento de condena (por parte de la misma persona jurídica)» Vid., también, en relación a esta cuestión De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 350.

³¹ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 349. Vid. también, Camacho Vizcaíno, A.; Cortés Labadía, J. P., ob. cit., p. 4, quien afirma que «en la práctica resulta casi imposible

Y en base a esta afirmación, podemos sostener que resultaría muy poco probable la comisión de delitos como, entre otros, la trata de personas, la prostitución y corrupción de menores, delitos contra el medio ambiente, tráfico de drogas, favorecimientos de la inmigración o el contrabando.

En realidad, si reparamos en ello, la decisión legislativa de extender el catálogo de delitos a los partidos políticos, sin ningún tipo de matización, resulta de nuevo ciertamente muy criticable puesto que aquel ha sido confeccionado o ideado en base a la actividad que desarrollan empresas y corporaciones, esto es, por tanto, desde una perspectiva del Derecho Penal económico y de la delincuencia de carácter socioeconómica. Pero, sin embargo, este listado de delitos no ha tenido en cuenta la clase de actividad que desarrolla una organización política³², y, por lo tanto, cuáles son los genuinos riesgos delictivos que ésta presenta. Este extremo queda evidenciado en el hecho, por ejemplo, de que un partido político no puede como persona jurídica ser declarado responsable de un delito electoral, al quedar todos los ilícitos penales contenidos en la LOREG excluidos del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas³³. Así, esta situación resulta a todas luces, incomprensible e inexplicable, puesto que citando a Zugaldía Espinar, hay que tener presente que determinados ilícitos penales presentes en esta normativa penal de carácter especial son susceptibles de enmarcarse en lo que se puede denominar como financiación electoral de los partidos políticos, el principal riesgo delictivo, que como hemos visto, presenta esta clase de entidades: estamos hablando, claro está, por un lado, del delito de falsedad en la contabilidad electoral del art. 149 LOREG y, por otro lado, de la infracción penal de la apropiación indebida de fondos electorales del art. 150 LOREG³⁴. Además, la doctrina, acertadamente también ha puesto de manifiesto el hecho de que a pesar de la transcendencia que determinados ilícitos penales pueden tener en el seno de un partido político a tenor de la actividades que éstos desarrollan, tampoco se les puede imputar deli-

---

que un partido político pueda cometer todos y cada uno de los delitos previstos para las personas jurídicas».

³² Vid., en este sentido, Maza Martín, J. M., *Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos*, Madrid, Editorial La Ley, 2018, p. 412, quien argumenta que este «catálogo, basado en la actividad empresarial, resulta aún menos comprensible trasladado a los partidos políticos».

³³ Vid., en este sentido, Del Moral García, A., ob. cit., p. 314, quien señala que carece de sentido el que hayan quedado al margen los delitos electorales. Vid, también, León Alapont, J., «Partidos Políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas: consideraciones en torno a su régimen jurídico y los compliance programs», en Matallín Evangelio, A. (dir.), *Compliance y prevención de delitos de corrupción*, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, p. 168, quien explica que «especial atención ha merecido por la doctrina la necesidad de atribuir a los partidos políticos los denominados «delitos electorales», cuya regulación está prevista en los arts. 139 a 150 de la LOREG».

³⁴ Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas...*, cit., pp. 380 y 382.

tos contra el honor, falsedades documentales, prevaricación, etc.³⁵ Así, con el fin solventar esta problemática, la doctrina que ha estudiado con profundidad esta cuestión ha propuesto diversas soluciones respecto al diseño de un catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por un partido político:

- a) En primer lugar, una primera posibilidad pasaría por fijar un específico listado de ilícitos penales susceptibles de ser cometidos por partidos políticos, siguiéndose de esta manera un criterio similar a lo que ocurre con la figura de la imprudencia del art. 12 CP. De hacerse ello así, esta clase de organizaciones únicamente responderían si existiese un precepto respecto a la concreta figura delictiva que incluyera un apartado que expresamente reconociera la posibilidad de que una infracción criminal pueda ser cometida por una formación política. Sin embargo, esta solución plantearía importantes inconvenientes como son, por un lado, el que se llegase a originar relevantes lagunas de punibilidad por omisiones u olvidos del legislador³⁶, y, por otro lado, ello provocaría que se tuviera que crear un específico listado de delitos para cada tipo de persona jurídica³⁷, como por ejemplo un catálogo de ilícitos penales susceptibles de ser cometidos por los sindicatos, también incluidos en el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.
- b) En segundo lugar, otra opción sería afirmar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con carácter general para cualquier tipo de delito, sin necesidad de incluir referencias específicas en cada tipo penal que admita esta posibilidad³⁸. Ello implicaría, por tanto, que un partido político, pudiera cometer aquellos delitos que por su naturaleza sean susceptibles de serles imputables cuando hayan realizado un comportamiento que nuestro ordenamiento jurídico considere típico, antijurídico y culpable. Como evidente ventaja de esta otra posibilidad está el que no se puedan producir omisiones por parte del legislador que provoquen injustificables lagunas de punibilidad, evitándose de igual modo largos listados de exclusiones o inclusiones de ilícitos penales en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas³⁹.

³⁵ León Alapont, J., «Partidos Políticos y responsabilidad...», cit., p. 167.

³⁶ Vid, en este sentido, De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 351, quien explica que «podría darse el caso de que el partido político realizara una conducta claramente atentatoria contra un bien jurídico, que incluso podría ser ya típica, antijurídica y culpable en el CP de ser realizada por una persona física, pero al no estar prevista como delito para las personas jurídicas, quedara impune».

³⁷ León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., p. 341. En sentido similar se pronuncia De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 350.

³⁸ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., pp. 351-352.

³⁹ Partidario de esta posibilidad se muestra León Alapont, J., «Partidos Políticos y responsabilidad...», cit., p. 167, quien sostiene que «en este sentido, consideramos que lo

- c) Una última posibilidad, que consideramos que sería la más adecuada, consistiría en que el legislador español excluyera en relación a determinados delitos, la posibilidad de aplicarlos a una organización política. Partidario de esta solución se ha mostrado un sector de la doctrina española que ha señalado que hay concretos ilícitos penales como son los delitos contra el honor, los delitos contra el orden público o los delitos de odio que no debieran poder ser imputados a esta clase de organizaciones, por poder condicionar su legítima y necesaria actividad⁴⁰.

2.3. *La doble vía de imputación de responsabilidad criminal establecida en el art. 31 bis. 1 CP: principales lagunas de punibilidad que pueden llegar a producirse*

A pesar de que existe un apasionante debate doctrinal en torno a esta cuestión⁴¹, si seguimos la «Teoría del Hecho de Conexión» o del «Hecho

---

más adecuado hubiera sido, para evitar lagunas de punibilidad, optar por un sistema de *numerus apertus*».

⁴⁰ Vid., aquí, Baucells Lladós, J., «Corrupción y responsabilidad penal de los partidos políticos», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 20, 2018, p. 25., en donde se afirma que «los riesgos de que esta figura pueda ser utilizada para intervenir en las funciones políticas deberían limitarse, por un lado, no extendiendo el *numerus clausus* de delitos que pueden generar responsabilidad penal a los propios de su actividad política: honor y orden público». Vid, también, Del Moral García, A., ob. cit., p. 314, en donde se afirma respecto a la cláusula de responsabilidad penal de las personas jurídicas de los delitos de odio del art. 510 bis CP que «su amplitud y la posibilidad de que no se acote bien (...) el círculo de sujetos capaces de arrastrar al partido político al ámbito penal con su actuación, puede dar pábulo a un campo bien abonado para la proliferación de querellas y la judicialización del debate político».

⁴¹ Vid, en este sentido, Zugaldía Espinar, J. M., «Societas delinquere potest: análisis de la reforma operada en el Código Penal español por la LO 5/2010, de 22 de junio», *La Ley Penal*, n. 76, 2010, p. 1, quien acertadamente afirma que «el problema de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas radica hoy en la necesidad de establecer los criterios normativos de imputación que permitan atribuir un delito a la persona jurídica (esto es, la necesidad de elaborar una teoría jurídica del delito —o teoría de la imputación— de la persona jurídica)». De este mismo autor, vid., igualmente, Zugaldía Espinar, J. M., «Modelos dogmáticos para exigir la responsabilidad criminal a las personas jurídicas (a propósito de las SSTs de 2 de septiembre de 2015, 29 de febrero de 2016 y 16 de marzo de 2016)», *La Ley Penal*, n. 119, 2016, en donde se hace un extenso análisis sobre la jurisprudencia del TS en relación a la Teoría Jurídica para el Delito Corporativo a través de los diversos pronunciamientos que ha ido realizando este órgano jurisdiccional sobre esta materia. Vid, además Rodríguez Almirón, F. J., «La responsabilidad penal de las personas jurídicas a raíz de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo», *Revista Aranzadi Doctrinal*, n. 6, 2017, p. 23, quien afirma que «es necesario adaptar la teoría general del delito a las personas jurídicas, pues son entes que si bien operan en la realidad no dejan de ser entes ficticios, y no se puede pretender aplicar automáticamente la teoría general del delito que está pensada para la persona física a la persona jurídica». Vid, también, Morales Hernández, M. A., «El transcendental papel de la jurisprudencia en la construcción de

de Referencia»⁴², en virtud de lo establecido en el art. 31 bis CP, apartado primero, para que un partido político pueda ser declarado en calidad de persona jurídica como responsable de una determinada infracción delictiva resulta imprescindible, tal y como afirma el profesor Zugaldía Espinar: la vulneración por parte de una persona física competente, que se encuentre vinculada con la organización política, de aquellos poderes que le son propios en el ejercicio de organización del partido político, en su nombre o en su cuenta, y en su interés⁴³. En este sentido, hay que tener presente que únicamente se puede imputar a una persona jurídica aquellos delitos que sean cometidos por personas físicas que tengan una determinada vinculación con aquella, bien sea porque éstos posean poderes de representación o de decisión o de control, o bien porque sean sujetos subordinados a los anteriores⁴⁴, siempre y cuando los superiores incumplieran sus deberes de control y vigilancia para evitar la comisión del delito⁴⁵. Este hecho provoca, como acertadamente critica la doctrina penal española, que para el singular caso de los partidos políticos se estén generando interpretaciones discrepantes acerca de qué sujetos en cuestión, dentro de una organización política pueden ser considerados personas físicas competentes a los efectos de lo establecido en el apartado primero del art. 31 bis CP⁴⁶, pudiéndose llegar a producir además en

---

una teoría jurídica del delito aplicable a las personas jurídicas», *La Ley Penal*, n. 133, p. 6, en donde se afirma la transcendental labor que va a tener que desempeñar el TS «de ir elaborando, paulatinamente, una completa y específica teoría jurídica del delito para la persona jurídica, de modo similar a como la ha ido realizando exitosamente para el ámbito de la persona física» puesto que «esta tarea permitirá determinar, bajo qué condiciones un hecho es delito para la persona jurídica y si se le puede imponer una pena, garantizando con ello (...) la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley».

⁴² Vid. en este sentido, Morales Hernández, M. A., «Los criterios jurisprudenciales para exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas en el delito corporativo», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 19, 2018, p. 368, en donde se señala que frente a otras posibles concepciones «el artículo 31 bis apunta al modelo del hecho de referencia o del hecho de conexión —atendiendo al fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al propio tenor literal de la ley e intentando ser coherentes e integrar los pronunciamientos del Tribunal Supremo». Vid, también, Marín de Espinosa Ceballos, E.B., «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso Bankia», *La ley Penal*, n. 102, 2013, p. 9, quien explica que en el «modelo del hecho de referencia» es preciso para exigir responsabilidad penal en la persona jurídica «en primer lugar, que una persona física (o varias integrados en un órgano social), directivo o subordinado, lleve a cabo un hecho de referencia (o conexión) que se adecue a un tipo penal de aquellos en los que se admite la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, y, en segundo lugar, que el hecho se pueda imputar (atribuir) a una persona jurídica sobre la base de su propia culpabilidad, esto es, sobre la base de la infracción por parte de ésta del deber que le compete de garantizar un desarrollo lícito de su actividad».

⁴³ Zugaldía Espinar», J. M., «La responsabilidad criminal de los partidos...», cit., p. 379.

⁴⁴ En este sentido, vid. el apartado primero del art. 31 bis CP.

⁴⁵ De esta manera, lo señala Sandoval Coronado, J. C., ob. cit., pp. 141-142.

⁴⁶ Terradillos Basoco, J., «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», en Álvarez García, F. J. (dir.), *Estudio Crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 174-175. Explica este autor aquí que

futuros procedimientos judiciales injustificables lagunas de punibilidad en este ámbito, tal y como vamos a exponer a continuación.

2.3.1. En relación a la letra a) del art. 31 bis.1 CP

Un primer grupo de personas físicas que podrían realizar el hecho de conexión, y dar lugar por tanto a que un partido político como persona jurídica sea declarada responsable, serían las incluidas en la letra a) del apartado primero del art. 31 bis CP. Así, en virtud de lo establecido en el citado precepto, hemos de distinguir realmente tres categorías distintas de personas físicas competentes:

a) En primer lugar, el «hecho de conexión» podría ser realizado por los «*representantes legales*» de la organización política.

En relación a este extremo, tal y como señala Maza Martín, esta exigencia «ha de circunscribirse, exclusivamente, al hecho de que el ilícito sea cometido por una persona física que ostente legalmente ese carácter representativo, en su persona, cualquiera que fuera el contenido de su actuación y su relación con las facultades que tenga atribuidas, siempre que (...) dicha actuación se haya llevado a cabo «*en nombre y por cuenta*» de la persona jurídica»⁴⁷. Esto significa, para el concreto caso de una organización política, que un determinado delito que admita la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe ser cometido, para integrar

---

«administradores de hecho o de derecho, sometimiento a la autoridad de otros, provecho, actividades sociales, son elementos que, perfectamente identificables en la estructura empresarial, solo con calizador pueden integrarse en las organizaciones políticas». Vid., también, Quintero Olivares, G., «Título II. De las personas criminalmente responsables de los delitos», en Quintero Olivares, G. (dir.), *Comentarios al Código Penal Español. Tomo I (Artículos 1 a 233)*, 7ª ed., Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2016, p. 410, quien argumenta que «la regulación descansa en su inicio en la contemplación de la actividad de sus órganos directivos individuales o colegiados. No hay que hacer un gran esfuerzo para comprender las dificultades que entraña el traslado de esas categorías a un Partido político: decidir qué personas ocupan el correspondiente y análogo rol en un Partido (...) exige un esfuerzo interpretativo que no puede utilizar las ideas económico-mercantilistas al uso, ni tampoco caer en la analogía». Vid., además, León Alapont, J., *Compliance penal. Especial referencia a los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, p. 159, quien señala que en relación a estos «*deberes de supervisión, vigilancia y control*» lo cierto es que «habrá que recurrir a aquellas normas extrapenales de carácter administrativo, mercantil o civil que establezcan: 1) Obligaciones genéricas (para la gestión en general); y, 2) obligaciones específicas (regulación sectorial)». No obstante, tal y como continúa argumentando este autor «en el caso de un partido político, esos deberes de supervisión, vigilancia y control no están sometidos en norma alguna. Ni de forma genérica, a diferencia de lo que sucede en la Ley de Sociedades de Capital o en el propio Código Civil, ni en normativa específica (a excepción de la LOFPP)» concluyendo a este respecto que «ello entraña un evidente déficit y un obstáculo a la hora de determinar la responsabilidad penal de los partidos políticos en los supuestos de la letra b) del 31 bis 1 CP».

⁴⁷ Vid., Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 196

esta categoría, por aquella persona física que actúe no en calidad de representante político sino en calidad de representante legal de esa organización política⁴⁸. Y es que, en este sentido, representante legal, será, tal y como señala Fernández Teruelo «aquella persona a la que la Ley atribuye directamente la potestad de representarla y por tanto el poder de actuar por ella y obligarla (frente a terceros) con sus actos; y muy particularmente, con motivo u ocasión de la celebración de negocios jurídicos que den lugar a vínculos (relaciones jurídicas frente a terceros)»⁴⁹.

En este sentido, la doctrina especializada en este ámbito, con acierto, ha señalado que es, por lo general, la ley reguladora de cada tipología de persona jurídica la que establece la designación de quién es el representante legal o, en su caso, representantes legales⁵⁰. Y, efectivamente, para el particular caso de una formación política, esto queda establecido en la LOPP puesto que en virtud de lo dispuesto en el art. 3, apartado segundo, letra k), los estatutos de los partidos políticos deberán tener, como uno de sus contenidos mínimos «*el cargo u órgano al que le corresponda la representación legal del partido*». En consecuencia, es cada formación política quien designa, de una forma libre, a su representante legal o sus representantes legales, esto es, a aquella persona o personas con poder exclusivo para vincular jurídicamente a la organización política frente a terceros⁵¹. En base a ello, en determinados partidos políticos podrá existir un órgano unipersonal mientras que, en otros, en cambio, lo que se habrá implementado es un órgano colegiado que ostente esta condición⁵². Además, existen determinadas figuras sobre las que puede existir una controversia en relación a su posible integración aquí: estamos haciendo referencia, por un lado, a los administradores de candidaturas a

⁴⁸ Coincidimos así con Del Moral García, A., ob. cit., p. 311.

⁴⁹ Fernández Teruelo, J. G., *Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención a través de un modelo de organización y gestión (compliance)*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, p. 111. Vid, también, Gómez Tomillo, M., *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, 2ª ed., Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2015, pp. 100-101. Se continúa argumentando aquí que «en cuanto a los representantes legales, debe entenderse que se incluye a todo sujeto que formalmente tenga poder para vincular jurídicamente a la entidad con sus decisiones, con independencia del título en virtud del cual posea tal capacidad; sea por delegación u originalmente, esto es, porque lo determine la legislación, sobre todo, aunque no sólo, la de naturaleza mercantil», continuando argumentando este autor aquí que «se abarcaría, pues, al propio Consejo de Administración, a la comisión ejecutiva, a los administradores únicos, solidarios, mancomunados, al consejero delegado» (p. 101).

⁵⁰ Vid., en este sentido, Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 111.

⁵¹ En este mismo sentido, lo señala León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., p. 295.

⁵² Vid., en este sentido, Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 112, quien afirma que «el desarrollo normativo de la posición y las funciones desempeñadas en el seno de las personas jurídicas por sus representantes ha dado lugar en algunos casos a la formación de órganos (a menudo colegiados) y a la atribución a los mismos de los poderes de administración, gobierno y representación frente a terceros de la entidad».

los que se hace referencia en la LOREG⁵³, y, por otro lado, a lo que sucede en determinados partidos políticos españoles que cuentan con distintas divisiones territoriales⁵⁴, defendiéndose en relación a este último extremo, según señala Fernández Teruelo, la inclusión en esta categoría de «determinados directivos o mandos intermedios de la entidad que, no ostentando la condición de administradores de la misma, poseen capacidades decisorias y organizativas relevantes»⁵⁵. A nuestro juicio, en ambos casos, habrá que estar a lo que se disponga en los estatutos de cada partido político en particular, para determinar si estos sujetos se pueden o no integrar aquí, teniendo siempre presente que en caso de que ello no sea posible, siempre podrán integrarse estas concretas figuras en las restantes categorías que se señalan en el art. 31 bis. 1. a) CP.

En este sentido, si analizamos a los principales partidos políticos en nuestro país, sus estatutos disponen lo siguiente:

- En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de ámbito nacional, es la secretaría de organización quien *«tiene atribuida la representación legal del partido, con plenas facultades para realizar cualquier contratación en nombre del Partido así como para asumir cualquier obligación por cualquier título o forma admitida en nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo delegar aquellas cuestiones de carácter técnico»*⁵⁶.
- En el Partido Popular de ámbito nacional (PP), es el presidente nacional el máximo responsable del partido en cada uno de sus ámbitos territoriales en relación con los cuales ejerce las facultades, entre otras, de *«ostentar la representación política y legal del Partido y presidir su Junta Directiva y Comité ejecutivo, en cuyas sesiones dispondrá de voto de calidad en los supuestos de empate»*⁵⁷.
- En el partido político Podemos es la Secretaría General quien tiene asignada la competencia de *«ejercer la representación legal del partido a efectos patrimoniales y procesales, en juicio o fuera de él, solidariamente a un miembro del Consejo de Coordinación elegido*

⁵³ Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 445.

⁵⁴ Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 113. Se explica aquí que en el supuesto de personas jurídica complejas, como podría ser precisamente el caso de las formaciones políticas, éstas se caracterizan «por la existencia de múltiples niveles y capacidades para representar a determinadas entidades, que pueden extenderse a todos los ámbitos (administradores) o a aspectos muy concretos y con escaso margen de maniobra por parte del representante».

⁵⁵ *Ibíd.*, p. 114.

⁵⁶ *Vid.*, art. 35, apartado cuarto, de los Estatutos Federales del PSOE, relativos a las funciones de la Comisión Ejecutiva Federal. Disponible en <https://www.psoe.es/media-content/2015/04/Estatutos-Federales-40C—.pdf> (consultado el 21.07.2022).

⁵⁷ *Vid.*, art. 43. a) de los Estatutos del Partido Popular, relativo al presidente nacional. Disponible en https://www.pp.es/sites/default/files/documentos/estatutos_xvii.pdf (consultado el 21.07.2022).

por el propio Consejo. Ambas personas tendrán plenas facultades para contratar en nombre del Partido y obligarlo válidamente por cualquier título o cualquier forma admitida en derecho»⁵⁸.

- En el partido político VOX de ámbito nacional «*corresponde al Presidente y en su caso a quien especialmente apodere, la representación de Vox ante todas las autoridades, entidades, instituciones, tribunales y personas, con facultades para ejercer cuantos derecho, acciones y recursos procedan*»⁵⁹.
- En el partido político Ciudadanos de ámbito estatal se señala a este respecto que «*el presidente del partido ostenta la representación política y legal del partido*»⁶⁰.

b) En segundo lugar, en virtud también de lo establecido en la letra a) del apartado primero del art. 31 bis CP, personas físicas competentes para realizar el «hecho de conexión» son igualmente «*aquellos integrantes de un órgano de la persona jurídica, que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica*».

Se estaría posibilitando aquí, por un lado, que el hecho de conexión fuese realizado por aquellas personas físicas designadas por la propia organización política a las que se les confiere poderes de decisión o facultades de organización y control, pudiéndose incluir por tanto, tal y como señala González Cussac, a cualquiera que «individual o colegiadamente tenga capacidad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica»⁶¹. De acuerdo con ello, se muestra también la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, sosteniéndose al respecto que «la vigente redacción permite incluir también en este apartado a quienes, sin ser propiamente administradores ni representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar decisiones, así como los apoderados singulares y a otras personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones»⁶². En consecuencia, de nuevo es necesario acudir a los esta-

⁵⁸ Vid., art. 25 de los Estatutos de Podemos, relativo a las competencias de la Secretaría General. Disponible en https://podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/estatutos_de_podemos.pdf (consultado el 21.07.2022).

⁵⁹ Vid., art. 16 de los Estatutos de VOX. Disponible en <https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2021/02/ESTATUTOS-28-12-2020.pdf> (consultado el 21/07/2022).

⁶⁰ Vid., art. 77 de los Estatutos de Ciudadanos. Disponible en https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/sections/page-estatutos/v-asamblea-general-estatutos.pdf?v=565_2 (consultado el 21.07.2022).

⁶¹ González Cussac, J. L., ob. cit., p. 133. Se continúa argumentando aquí que «la redacción del nuevo art. 31 bis a) requiere solo que la persona física está autorizada a tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, aunque no posea *poder de mando* u ostente una *posición de mando* en la misma (por ejemplo, en supuestos de delegación de funciones y singularmente en algunas figuras de apoderamiento)».

⁶² Vid. apartado 2.3 de la Circular 1/2016. Sobre esta cuestión, vid. también, Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 106, quien sostiene que se «incluirán con frecuencia a los

tutos de cada partido en cuestión para conocer qué personas o concretos órganos están autorizados para adoptar decisiones en nombre de la organización política.

Por otro lado, en lo que respecta a la figura de los administradores de hecho, la fiscalía sostiene que éstos se integrarían en esta categoría, debiéndose interpretar «que la autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica puede ser también tácita»⁶³. Partidario de ello se muestra también León Alapont quien sostiene que esta situación se producirá cuando la persona tome decisiones en nombre del partido con el consentimiento de éste, a pesar de que no haya como tal una habilitación formal para ello, esto es, por tanto, ha de tratarse de una actuación «de facto», como puede ser la de una persona que, sin tener puesto orgánico alguno en la entidad política, se encargue de recibir la donación política⁶⁴. Sin embargo, a nuestro juicio, el administrador de hecho tendría mejor encaje en la categoría de personas que ostentan facultades de organización y control, junto con los mandos intermedios, como vamos a ver a continuación.

c) La última de las categorías que se incluyen en esta letra a), la constituirían aquellas personas que «ostenten facultades de organización y control».

Respecto de este extremo, la Fiscalía en su circular núm. 1/2016, ha considerado que «la expresión engloba a un potencial alto número de cargos y mandos»⁶⁵. Autores como Gómez Tomillo sostienen que se trata ésta de una categoría residual que integraría «al menos, a quienes sin ser formalmente administradores gozan en virtud de contrato, por delegación, o fácticamente de poderes de gobierno o fiscalización interna de bienes y personal de la entidad», incluyéndose, por tanto, entre ellos «a los administradores de hecho, a los mandos intermedios (...) y al *compliance officer*, siempre que efectivamente unos y otros ejerzan formal

---

apoderados (que no tengan delegado expresamente el poder de representación legal de la persona jurídica y lo ejerzan de forma relevante para el Derecho penal) y específicamente dentro de éstos, a quienes se les ha delegado funciones sin ser miembros del órgano de administración, y, en general, a los directores generales, gerentes, etc., que altamente profesionalizados desempeñen funciones de dirección en virtud de una relación laboral, subordinados al citado órgano de administración». Vid., además, Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 115, quien afirma que «estarían las personas designadas por la propia persona o entidad jurídica, a través de sus procesos de decisión interna, a las que la misma confiere más o menos poderes de decisión o facultades de organización y control, en uso de su autonomía y capacidad de obrar. Formarían parte de esta segunda categoría los denominados «representantes voluntarios» para cuya definición jurídica habrán de tenerse en cuenta los actos concretos de apoderamiento realizados por la persona jurídica».

⁶³ Vid. apartado 2.3 de la Circular 1/2016. También incluye aquí a los administradores de hecho, entre otros, Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 106 o Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 118.

⁶⁴ León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., pp. 297-298.

⁶⁵ Vid. apartado. 2.3 Circular 1/2016.

o materialmente tales poderes»⁶⁶. En nuestra opinión, efectivamente, el administrador de hecho tendría mejor encaje en esta última categoría tal y como señala un sector doctrinal⁶⁷. No obstante, hay que tener presente, que existen multitud de opiniones doctrinales en relación con qué sujetos en concreto se podrían incluir aquí⁶⁸— como en realidad ocurre con el resto de categorías a las que hemos hecho mención—. Por ende, ésta va a ser una cuestión que se tendrá que ir dirimiendo paulatinamente en la jurisprudencia.

Estas tres categorías que acabamos de analizar tienen como elemento común la realización por parte de cualquier persona física competente de un delito —de los que admiten responsabilidad penal de las personas jurídicas— en «*nombre o por cuenta*» del partido político⁶⁹, no pudiendo generar el hecho de conexión, en consecuencia, si se realiza una acción de exceso⁷⁰. Y ello provoca, en definitiva, que los cargos públicos perte-

⁶⁶ Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 105.

⁶⁷ A favor también de ello se muestra González Cussac, J. L., ob. cit., p. 134, para quien podría equipararse este grupo al administrador de hecho, argumentando además que «la redacción del art. 31 bis nuevamente va mucho más lejos, pues sólo exige *ostentar facultades de organización y control*, pero sin estar vinculadas ni a la posición de mando ni a la atribución de facultades directivas en la sociedad».

⁶⁸ Así, por ejemplo, Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 116, señala que «la determinación de estos últimos debe llevarse a cabo, trascendiendo los mecanismos jurídicos de apoderamiento y representación frente a terceros, atendiendo a la *operatoria interna de actuación de la persona jurídica*». Así, «ello incluye desde los miembros del órgano de administración hasta todo tipo de mandos intermedios, integrados en el organigrama de la empresa y dotados de cierto poder en su respectivo ámbito de función, incluidos cualesquiera auxiliares o colaboradores a los que la persona jurídica ocupa en el desempeño de su actividad, que tengan conferidas facultades de organización y control sobre el funcionamiento interno». Por su parte, González Cussac, J. L., ob. cit., p. 134., explica que «desde luego en este concepto posiblemente entrarían los que la normativa mercantil califica de *representantes orgánicos*». Por último, León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., 299, argumenta que «se trata de una «cláusula de cierre» que va dirigida a quienes sin estar comprendidos en tales categorías tienen en el partido (formal o materialmente) «poderes de gobierno o fiscalización interna de bienes y personas». De forma que se tratará de individuos cuyos actos o decisiones tendrán más bien una eficacia o proyección *ad intra*».

⁶⁹ Vid, a este respecto, León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., p. 311, quien explica que «el sujeto actuará «en nombre» del partido cuando ejerza las competencias que formalmente le han sido asignadas, y lo hará «por cuenta» de éste cuando actúe dentro de un concreto ámbito competencial que, aun no habiéndose establecido formalmente, haya sido igualmente definido por el partido». Vid., en este sentido también, Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 114.

⁷⁰ Sobre esta cuestión, vid. Zugaldía Espinar, J. M., «Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 121, 2017, p. 26, quien explica que ello implicaría que «una *acción de exceso* no es expresión del poder de la persona jurídica ni puede ser finalidad de la sanción penal la evitación de acciones de exceso que el autor lleve a cabo con ocasión de su pertenencia a la organización». Vid, también, Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 126, quien sostiene en relación al requisito contenido únicamente en el apartado a) del art. 31 bis CP, referido a «en nombre» de la

necientes a un determinado partido político no cumplan los requisitos establecidos en la letra a) del art. 31 bis CP, salvo que concurran en su persona una doble condición, esto es, por un lado, la de cargo público, y, por otro lado, la de representante, administrativo o directivo de su partido político⁷¹, produciéndose por tanto aquí una posible e importante laguna de punibilidad que podría darse en futuros procedimientos judiciales que acontecieren en este ámbito.

2.3.2. En lo concerniente a la letra b) del art. 31 bis.1 CP

La segunda vía de atribución de responsabilidad criminal a un partido político, sería la realización de un ilícito penal por parte de algunas de las personas físicas competentes que se pueden integrar en la letra b) del apartado primero del art. 31 bis. CP. Así, este precepto exige: en primer lugar, que el delito se cometa en «*el ejercicio de actividades sociales*», lo que supone que la actuación ha tenido que ser realizada en el entramado organizativo de la persona jurídica⁷², por lo que las personas a las que se refiere este apartado se tienen que valer de la propia estructura de la organización política en actividades vinculadas a la misma⁷³; en segundo lugar, el delito debe cometerse «*por cuenta*» del partido político por lo que coincidimos con la doctrina cuando señala que se requiere de un comportamiento material pero originado formalmente en un acto de delegación a atribución de funciones sociales⁷⁴; c) en tercer lugar, se precisa un «*grave incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y con-*

---

persona jurídica, que éste «tiene, desde un punto de vista negativo, el efecto de excluir del ámbito que activa la responsabilidad de la entidad a aquellos actos individuales (delictivos) que nada tengan que ver con el objeto social ni con las tareas que el sujeto tenga atribuidas».

⁷¹ Partidario de ello se muestra Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 99, quien argumenta que «el concejal de urbanismo que participa, por ejemplo, en un supuesto de prevaricación urbanística, ni es ni está actuando como integrante del partido político que le propuso en la elección para ese cargo incluyéndose en las correspondientes listas de candidatos», por lo que «ni por los elementos subjetivos de vinculación con el partido político que concurren en su persona, ni generalmente por producirse la actividad delictiva en el seno de las actividades de la organización, pueden dar lugar a responsabilidad penal alguna de ésta».

⁷² De esta manera lo afirma González Cussac, J. L., ob. cit., p. 145, quien explica que, por tanto, «solo cabe apelar a que el delito cometido por el subordinado deba guardar relación con el objeto social». Vid, también, Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 127, quien sostiene que ello «tienen el efecto de excluir del ámbito que activa la responsabilidad de la entidad aquellos actos individuales (delictivos) que nada tengan que ver con el objeto social ni con las tareas que como empleado de la entidad tenga encomendadas».

⁷³ Vid., en este sentido, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 447, quien explica que algunas veces es «imposible concebir que el hecho delictivo se realice fuera de la actividad propia del partido político, por ejemplo cuando de la falsificación de cuentas electorales, aún no contempladas en el catálogo delictivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se trate, al igual que acontece con otros tipos penales, como el delito fiscal o algunas figuras de la financiación ilegal del propio partido político».

⁷⁴ González Cussac, J. L., ob. cit., p. 145

trol de sus actividades», que al ser un requisito que se exige en el apartado b) pero no en el a), debe ser realizado por parte de «los representantes legales y quienes esté autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización o control»⁷⁵; y por último, en cuarto lugar, la expresión, «*atendidas las concretas circunstancias del caso*», implica, como señala la doctrina, que es necesario acreditar una relación causa-efecto —o de evitabilidad en caso de la omisión— entre el incumplimiento (grave) de la norma y la comisión del delito, esto es, probar que ese concreto ilícito penal ha sido posibilitado precisamente por el incumplimiento⁷⁶. Así, en relación a esta segunda vía, cabe afirmar respecto a las personas físicas competentes que:

- a) En primer lugar, no existe duda alguna de que los propios trabajadores de la organización política podrían ser incluidos en este precepto, puesto que este tipo de sujetos vienen caracterizados en cualquier persona jurídica, por su incapacidad de dirección o supervisión, siendo en definitiva meros ejecutores de decisiones ajenas⁷⁷.
- b) En segundo lugar, también podrían ser incluidos aquí otros subordinados de una formación política, puesto que en realidad en la letra b) del art. 31. 1 CP no se está haciendo referencia únicamente a una relación laboral, sino que también este precepto alude a la existencia de una vinculación vertical entre unas y otras, por lo que se podría llegar a entender integrada aquí cualquier situación de dependencia, subordinación o sometimiento⁷⁸. En este sentido se ha pronunciado la propia Fiscalía del Estado, en cuya Circular 1/2016, de 22 de enero, se afirma que «*es suficiente que operen en el ámbito de dirección, supervisión, vigilancia y control de éstas. No es necesario que se establezca una vinculación formal de la empresa a través de un contrato laboral o mercantil, quedando incluidos au-*

⁷⁵ Gómez Tomillo, M., ob. cit., pp. 108-109.

⁷⁶ De esta manera lo señala Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 129.

⁷⁷ Vid., en este sentido, Gómez Tomillo, M., ob. cit., pp. 106-107. Vid. también, González Cussac, J. L., ob. cit., p. 144, quien explica que en este precepto se estaría haciendo referencia a «cualquier empleado que carezca, legal y contractualmente, de poder decidir o de ejercer control en el seno de la empresa».

⁷⁸ En este sentido, vid. Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 202, quien argumenta que «cualquiera que fuera el origen de ese sometimiento a la autoridad ajena, tanto sea de naturaleza laboral como de relación de servicios permanentes, temporales o esporádicos, para la realización de una concreta tarea, o con otra forma o causa, o independientemente del tipo de retribución que se perciba, siempre que exista la dependencia jerárquica referida, estamos ante una hipótesis de posible inclusión en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas». En igual sentido se expresa Fernández Teruelo, J. G., ob. cit., p. 119. Vid., también, Del Moral García, A., ob. cit., p. 311. Vid., además, González Cussac, J. L., ob. cit., p. 144.

tónomos o trabajadores subcontratados, siempre que se hallen integrados en el perímetro de su dominio social»⁷⁹.

Así, León Alapont argumenta que las personas que integran esta vía de la letra b) del apartado primero del art. 31 bis CP no tienen por qué tener una vinculación formal con la organización política, puesto que nada impide que un subordinado no sea un miembro de ésta, sino que podría ser una persona externa a ella, puesto que lo realmente determinante es la existencia de un sometimiento a la autoridad de los «dirigentes» del partido político. Este autor argumenta que lo relevante es «que tales personas queden integradas en cualquier ámbito de la organización o las actividades del partido y que operen bajo la dirección y control de alguna de las personas descritas en la letra a) del art. 31 bis 1 CP»⁸⁰, debiéndose producir, «en consecuencia, entre unos y otros, una relación de dependencia, que a juicio de algún autor ha de ser «directa»»⁸¹. Sin embargo, a nuestro juicio, lo determinante o decisivo es que la persona subordinada esté sometida —aquí está la clave— a específicos deberes —no genéricos— de supervisión, vigilancia y control —una interpretación que es defendida también por cierto sector doctrinal⁸². Y, en base a ello, en lo que concierne al concreto ámbito de los partidos políticos, entendemos que el ostentar simplemente la condición de militante o simple afiliado no sería suficiente a la hora de realizar el «hecho de conexión» en un ilícito penal del que se quisiera hacerse responsable a la organización política —como podría ser el caso de un delito de financiación ilegal de los partidos políticos del apartado quinto del art. 304 bis CP—,

⁷⁹ Vid. apartado 2. 5. de la Circular 1/2016, de 22 de enero sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Sin embargo, como indica Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 107, «debe entenderse que se requiere alguna clase de vinculación jurídica entre la persona física actuando, de carácter subsidiario, y la persona jurídica. Sin embargo, ésta no puede concebirse en términos estrictos de relación laboral». Continúa explicando este autor aquí «en consecuencia, bastaría, por ejemplo, con un contrato de arrendamiento de servicios» (p. 107).

⁸⁰ León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., 300-301.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 301.

⁸² Vid, en este sentido, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 444, quien explica en relación a militantes y afiliados que «a pesar de formar parte de la organización, no pueden predicarse la condición de subordinados jerárquicos en relación con los responsables y directivos de dicha formación, ni, por consiguiente, susceptible de control por éstos». Continúa señalándose aquí que esta exclusión afectaría igualmente «a partidarios o electores que votasen o apoyasen a los candidatos del partido político, en los que, a pesar de ese apoyo, incluso definitivo para el partido político, obviamente no cumplen ni remotamente los requisitos referidos», y respecto de los militantes, indica que «tampoco podría construirse (...) la responsabilidad penal del partido político en el que militan, no sólo porque su dependencia jerárquica respecto de los mandos del partido no tiene el grado de vinculación necesario, sino más aún porque el hecho, eminentemente práctico, de la imposibilidad de control de la conducta de todos y cada uno de quienes integran la militancia del partido político».

encontrándonos aquí otra posible y relevante laguna de punibilidad en la intervención penal.

2.3.3. El requisito del beneficio directo o indirecto aplicado a una organización política

Las dos vías de atribución de responsabilidad criminal contenidas en las letras a) y b) del art. 31 bis.1 CP tienen como elemento en común que los delitos realizados por las personas físicas competentes han de ser realizados en «*beneficio directo o indirecto*» de la persona jurídica. Y, esto nos hace plantearnos cuál sería la interpretación de ello para el particular caso de las organizaciones políticas.

En relación a este requisito, se han ido pronunciado ya tanto la jurisprudencia, como el Ministerio Fiscal y también la doctrina científica, realizando cada una de ellos su propia interpretación al respecto, pero que en realidad podemos afirmar que todas ellas tienden en definitiva a converger:

- a) Así, el Tribunal Supremo, ha indicado que con la expresión «*beneficio directo o indirecto*» el legislador alude «a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de la posición respecto de otros competidores, etc., provechosa para el lucro o la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo seno el delito de su representante, administrador o subordinado jerárquico, se comete»⁸³.
- b) También este elemento ha sido objeto de análisis por parte de la Fiscalía en su Circular núm. 1/2016, de 22 de enero, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, indicándose a este respecto que «*la sustitución de la LO 1/2015 del término «provecho» por el de «beneficio directo o indirecto» despeja las dudas en favor de una interpretación lata que permite extender la responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades cuyo objeto social no persiga intereses estrictamente económicos, así como incluir los beneficios obtenidos a través de un tercero interpuesto (caso de la cadena de sociedades), los consistentes en un ahorro de costes y, en general, todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales*», llegándose igualmente a señalar que «*la nueva expresión legal «en beneficio directo o indirecto» mantiene la naturaleza objetiva que ya tenía la suprimida «en provecho» como acción tendente a conseguir un beneficio, sin necesidad de que este se produzca, resultando*

---

⁸³ Vid., Fundamento de Derecho Decimotercero de la STS núm. 154/2016, de 29 de febrero de 2016.

suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad»⁸⁴.

- c) Por último, la doctrina científica mayoritaria se muestra igualmente partidaria, tal y como hacen el Alto Tribunal y la Fiscalía, de realizar una interpretación amplia de esta expresión. Así, pues, la doctrina señala que este beneficio de la persona jurídica no debe ser considerado únicamente en términos económicos, sino que podría integrarse aquí cualquier tipo de ventaja de naturaleza distinta⁸⁵, señalándose que sería suficiente la objetiva tendencia a conseguir este beneficio directo o indirecto⁸⁶.

Pues bien, para el particular caso de un partido político, siguiendo esta interpretación sobre la que existe un amplio consenso, el beneficio al que alude tanto la letra a) como b) del apartado primero del art. 31 bis CP, podría llegar a entenderse en un sentido muy amplio, pudiéndose contemplar por tanto los beneficios electorales o propagandísticos⁸⁷ e incluso dar cabida aquí a situaciones como la obtención gracias a ello de nuevas cuotas de poder, el sufragio de gastos de funcionamiento de la organización política o la colocación de militantes⁸⁸. Y bastaría, incluso que la persona física competente buscara con ello el beneficio del partido político a través de una actuación que pudiera ser considerar objetiva-

⁸⁴ Vid., apartado 2.4 de esta Circular 1/2016, de 22 de enero.

⁸⁵ Vid., Zugaldía Espinar, J. M., «Teorías jurídicas del delito...», cit., p. 26, quien explica que el beneficio de la persona jurídica, que puede ser compatible y compartido con el beneficio propio de la persona física, no ha de entenderse en términos estrictamente económicos, aunque esto será lo más habitual. Y es que, a este respecto, sería suficiente con que se facilite de algún modo el funcionamiento de la persona jurídica o la consecución de su objeto social, bastando, por ejemplo, con la intención de aquella de obtener una ventaja para evitar la libre competencia logrando que sus competidores retrasen el funcionamiento de un producto. Vid., igualmente, Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 116, quien señala que «probablemente, el beneficio directo implique la obtención de cualquier clase de ventaja no sólo económica sino de cualquier otra índole, incluyendo cualquier otro elemento menos tangible como el prestigio social, mercantil», mientras que, por otro lado, el beneficio indirecto «capta especialmente el ahorro de costes».

⁸⁶ Respecto a esta cuestión, señala Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 119, que «se estaría requiriendo la constatación de una idoneidad *ex ante* de la conducta de la persona física para que la persona jurídica obtuviese alguna clase de beneficio asociado a aquélla, aunque tal beneficio no fuese directo o inmediato, por ejemplo, por ser una posibilidad futura que, finalmente, no acaeciese», señalando además que «como en el caso de las personas físicas, para verificarse debería recurrirse al criterio de un espectador objetivo». Vid., igualmente, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 449, quien, siguiendo los criterios de amplitud de la Circular y de la STS de 29 de febrero de 2016, afirma que «podríamos sostener que la eventualidad, o expectativa, del beneficio, máxime en su forma indirecta, podría configurar el elemento delictivo».

⁸⁷ De esta manera lo señala Del Moral García, A., ob. cit., p. 312.

⁸⁸ De esta forma lo afirma Quintero Olivares, G.; Franquet Sugrañes, M. T., «Lección 10. Estado, mercado y Constitución: la dimensión penal» en Quintero Olivares, G. (dir.), *Derecho penal constitucional*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 512.

mente apta para ello⁸⁹. No obstante, cierto es, como ha señalado algún autor, que, dependiendo de las circunstancias, en algunos casos será más fácil o más difícil probar esta relación causal entre la concreta conducta delictiva realizada y ese beneficio obtenido por la formación política⁹⁰. Y es que, efectivamente, sin duda, muchas conductas delictivas podrían ser realizadas para facilitar el funcionamiento del partido político al obtenerse con ello una posición de ventaja respecto a sus adversarios políticos, siendo, no obstante, hartamente difícil probar esta relación causal en futuros procedimientos judiciales.

2.4. Las sanciones a imponer a un partido político responsable de un delito corporativo: algunas cuestiones problemáticas

El catálogo de penas que el legislador español ha diseñado para personas jurídicas, y que se encuentra contenido en el apartado séptimo del art. 33 CP, es también el que puede imponerse a una organización política cuando ésta llegue a ser declarada responsable de un delito en virtud de lo establecido en el art. 31 bis CP. En este sentido, como ocurre con el resto de las personas jurídicas, la multa tendrá siempre carácter obligatorio para la formación política, mientras que las demás penas tendrán, en cambio, un carácter potestativo⁹¹. De esta manera, coincidimos con el sentir de la doctrina mayoritaria⁹² cuando afirma que las consecuencias jurídicas que pueden llegar a imponerse en materia de penas son especialmente intensas en el particular caso de un partido político, al poder verse afectado no sólo el normal funcionamiento de este tipo de entidades, sino también al poder verse perjudicada la propia estructura institucional de nuestro país. Y, es que, efectivamente, si reflexionamos detenidamente sobre ello, son varias las penas que podrían ocasionar relevantes problemáticas en caso de imponerse a una organización política.

Así, en primer lugar, la pena más grave que podría imponerse a este tipo de entidades sería la pena de disolución⁹³ que en virtud de lo estable-

⁸⁹ Del Moral García, A., ob. cit., p. 312.

⁹⁰ Vid. en este sentido León Alapont, J., *Compliance penal. Especial...*, cit., p. 148.

⁹¹ Vid. Barquín Sanz, J., «Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia», en Morillas Cueva, L. (dir), *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política*, Madrid, Dykinson, 2021, p. 347, quien señala que «se habilita al órgano judicial para imponer adicionalmente una o varias sanciones interdictivas (...) enumeradas en el art. 33. 7 CP después de la multa».

⁹² Esta cuestión es abordada ampliamente por De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., pp. 366-380.

⁹³ Vid. Faraldo cabana, P., «La disolución de partidos políticos como sanción penal», *Estudios Penales y Criminológicos*, n. 28, 2018, p. 105.

cido en la letra b) del apartado 7 del art. 33 CP «*producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita*», lo que supondría, en definitiva, su «muerte civil»⁹⁴. En realidad, se trata de una pena que exige para su imposición el que concurran algunos de los requisitos establecidos en el art. 66 bis CP, esto es, o bien que exista un supuesto de multirreincidencia o bien que se trate de una persona jurídica instrumental cuya principal actividad sea delictiva⁹⁵. No obstante, en realidad, la imposición de esta clase de pena a un partido político es sumamente problemática dadas las trascendentales funciones que este tipo de organizaciones tienen asignadas en nuestro ordenamiento jurídico, por atribución constitucional. En este sentido, coincidimos con De Pablo Serrano cuando señala que «resulta preocupante y perturbadora por los efectos que podría tener sobre el sistema de partidos y la posibilidad de ejercicio de la libertad ideológica de los ciudadanos y sus derechos de participación política, que quedarían dañados si una formación política fuera disuelta»⁹⁶. Por ello, consideramos que difícilmente va a resultar de aplicación esta específica pena para el supuesto de una organización política, máxime teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido que la disolución de una persona jurídica por decisión judicial tiene que atenerse a un adecuado juicio de proporcionalidad⁹⁷, un hecho éste que implica, en definitiva, que únicamente en situaciones muy extremas se cumpliría este requisito exigido por el máximo intérprete de nuestro texto constitucional.

En segundo lugar, una pena a imponer con carácter obligatorio en caso de que una concreta organización política sea declarada responsable como persona jurídica de un concreto ilícito penal, es la pena de multa contenida en la letra a) del art. 33. 7 CP. Entendemos, aquí, que la imposición de esta sanción a un partido político no plantearía *a priori* problemática alguna, puesto que ésta podrá ser satisfecha con su propio patrimonio conformado en primer lugar, por las subvenciones públicas obtenidas en el marco de la financiación pública y, en segundo lugar, por todos aquellos fondos que tengan una naturaleza privada. No obstante, hemos de advertir, que en realidad el funcionamiento de una organización política sí que podría verse en determinados casos realmente afectado, pero ello va a depender de la cuantía de la multa que se le imponga,

⁹⁴ Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas...*, cit., p. 127.

⁹⁵ Vid., en este sentido, Faraldo Cabana, «La disolución de partidos políticos como sanción penal», ob. cit., p. 106, quien explica que «en cualquiera de los dos casos apuntados, utilización instrumental o multirreincidencia, se entiende que la actividad ilícita ha adquirido preponderancia en el conjunto de actividades del partido, lo que justifica su incoincidencia a través de una pena de disolución».

⁹⁶ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 348.

⁹⁷ Vid., STC núm. 85/2003, de 8 de mayo de 2003.

provocando esto que este tipo de sanción pueda llegar a tener en estas entidades unos efectos preventivos muy relevantes.

En tercer lugar, otra de las penas a imponer a una formación política sería la contenida en la letra c) del art. 33. 7 CP, esto es, la «*suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de los cinco años*». Así, tal y como señala la doctrina, la suspensión de la actividad de la persona jurídica podrá ser total o parcial⁹⁸, por lo que en caso de querer aplicarse la misma a un partido político, lo lógico sería que el órgano jurisdiccional limitara a un ámbito concreto esta suspensión de las actividades de la organización política, dadas las trascendentales funciones que éstas tienen asignadas. Por ello, como afirma De Pablo Serrano «es preciso que la suspensión temporal de actividades del partido político se adopte de forma rigurosa, limitándose al ámbito de actividades que estuvieran más vinculadas a la actividad ilegal, en consonancia con la finalidad preventiva de la pena que se defiende con carácter general»⁹⁹.

En cuarto lugar, la pena contenida en la letra d) del art. 33. 7 CP relativa a la «*clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años*» también podrá ser impuesta a un partido político por parte del órgano jurisdiccional. Nos encontramos ante una medida cuya imposición en realidad podría llegar a ser ineficaz en caso de imponerse a un partido político —si bien este hecho también ocurre para cualquier otra persona jurídica— ya que nada impediría que su actividad fuese realizada en otro bien inmueble distinto a aquel al que se ha clausurado, si bien es cierto que ello podría suponer que se impidiera el acceso a cierta documentación o información que únicamente se encuentra allí, impidiendo el normal funcionamiento de la organización política¹⁰⁰.

En quinto lugar, distinta a las anteriores penas facultativas, es la medida establecida en la letra e) del art. 33. 7 CP, esto es, «*la prohibición de realizar en un futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido, favorecido o encubierto el delito*». Ésta podrá ser temporal – si bien en este caso el legislador ha establecido un máximo de 15 años— o definitiva. La doctrina señala respecto de la misma, que habrá que tener en cuenta el específico perfil de la persona jurídica a la hora de prohibir cualquier tipo de actividad vinculada con un determinado sector o concretar una determinada actividad¹⁰¹. Por ello, entendemos que, en caso de imponerse esta medida a un partido político, el órgano jurisdiccional deberá especifi-

---

⁹⁸ Vid., Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas...*, cit., p. 128, en donde señala que el «Código Penal no define el contenido de esta pena y no existe obstáculo para entender que la suspensión puede ser total (...) o bien afectar exclusivamente a algún sector de la actividad».

⁹⁹ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 365.

¹⁰⁰ Coincidimos así con León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., pp. 406-407.

¹⁰¹ Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas...*, cit., p. 129.

car el concreto ámbito de la actividad prohibida, no debiéndose impedir aquellas estrechamente relacionadas con las trascendentales funciones que este tipo de entidades tienen asignadas, puesto que entendemos que ello podría ser inconstitucional.

En sexto lugar, otra de las posibles penas a imponer a una formación política responsable de un delito sería la *«inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años»*, la cual se encuentra contenida en la letra f) del art. 33. 7 CP. En relación a su aplicación al particular caso de un partido político, si bien es cierto que la Ley General de Subvenciones excluye la financiación pública que precisamente reciben los partidos políticos por mor de lo establecido en la LOFPP y en la LOREG al definir el concepto de subvención¹⁰², lo cierto es que nada impediría que aquella tuviera la consideración, sin embargo, de ayuda pública¹⁰³. Por tanto, un órgano jurisdiccional que decidiera imponer junto a la multa esta pena, lo que haría sería originar unas consecuencias que podrían llegar a ser muy nocivas para la organización política puesto que la financiación pública para este tipo de entidades en nuestro país tiene un peso muy relevante¹⁰⁴. Y es que, en este sentido, como señala De Pablo Serrano este tipo de medida tendría una finalidad preventivo-especial «toda vez que si desea continuar con su finalidad política, para lo cual necesita disponer de todos los cauces de financiación posibles, debe evitar en un futuro la comisión de delitos»¹⁰⁵. No obstante, en caso de imponerse a un partido político las otras posibilidades que contempla el art. 33. 7. f), esto es, la pena de inhabilitación para contratar con el sector público o la inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, las repercusiones, como resulta lógico, serían mucho menores.

La última de las posibles penas facultativas para una persona jurídica es la recogida en la letra f) del art. 33. 7 CP, que consiste en la *«intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que estime necesario, que no podrá exceder de cinco años»*, disponiéndose en este sentido que *«la intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones,*

¹⁰² Así se señala en el art. 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones al disponerse que *«quedan excluidos del ámbito de esta ley: (...) b) Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; c) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos»*.

¹⁰³ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 366.

¹⁰⁴ Vid., en este sentido, Puente Aba, L. M., *El delito de financiación ilegal de partido políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, p. 23, quien señala que «la financiación de origen público constituye el pilar fundamental para el funcionamiento y mantenimiento de los partidos políticos en España».

¹⁰⁵ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., pp. 365-366.

secciones o unidades de negocio». Esta clase de pena, al igual que ocurre con la disolución, puede tener unos efectos especialmente intensos en el caso de imponerse a un partido político, al poder verse afectado el propio sistema de partidos, la posibilidad de libertad ideológica de los ciudadanos y el derecho de participación política¹⁰⁶. Por ello, esta pena sólo debe ser impuesta cuando se produzcan determinadas circunstancias — como pudiera ser el impago de nóminas por parte del partido político o el impago de deudas contraídas con terceros—, restringiéndose ésta a la actividad o entorno en el que se hubiese dado el delito, puesto que de lo contrario podría resultar obstaculizado el ejercicio de las esenciales funciones que este tipo de entidades tienen asignadas.

Así, pues, como podemos observar, muchas de las penas que actualmente se contemplan para los partidos políticos españoles plantean en realidad graves inconvenientes en caso de que un órgano jurisdiccional decidiera imponerlas.

- a) En primer lugar, porque la imposición de determinados tipos de penas resulta una cuestión muy controvertida. Así, de un lado, nos encontramos, con la posibilidad, de que el órgano jurisdiccional pudiera imponer una pena de disolución para un determinado partido político, lo que podría llegar a ser considerado incluso inconstitucional, en base a ese juicio de proporcionalidad al que nos hemos referido. Pero, de otro lado, otras clases de penas, como podrían ser la suspensión temporal de actividades o la prohibición de realizar en un futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito o incluso la intervención judicial, podrían llegar igualmente a conculcar el correcto funcionamiento del sistema partidos y también el desarrollo de las esenciales funciones que este tipo de entidades tienen constitucionalmente atribuidas, lo que implicaría, tal y como con acierto señala la doctrina, la conveniencia de que los jueces y tribunales españoles las apliquen de una forma muy restrictiva. Y aun así este hecho podría originar importantes inconvenientes por el alcance que esta medida podría tener en determinadas organizaciones políticas que cuentan con una compleja organización¹⁰⁷. Por

---

¹⁰⁶ Vid, en este sentido, Zugaldía Espinar, J. M., *La responsabilidad criminal de las personas...*, cit., pp. 130-131, quien indica que el juez disfruta de un margen de apreciación para valorar la adecuación de esta medida, cuyas características tanto de extensión como de contenido deben definirse a la luz, precisamente de finalidades preventivo-especiales (desde la remoción y sustitución de los administradores hasta la mera supervisión de la actividad).

¹⁰⁷ Vid. León Alapont, J., «¿A qué «partido político» imputar...», cit., p. 163, quien a este respecto explica que el órgano judicial debe procurar que la pena vaya dirigida o recaiga sobre aquella «subunidad» que hubiera «cometido» el delito, debiéndose tener presente que «en este caso, no todas las penas admitirán esa posibilidad: sí la suspensión o prohibición de actividades, el cierre de locales, o la intervención judicial. No la disolución,

ello, cierto sector doctrinal aboga porque la única pena que debería permitirse para las organizaciones políticas sería la multa¹⁰⁸, siendo, por tanto, necesario excluir todas las demás¹⁰⁹.

- b) Además, en segundo lugar, otro elemento a tener en cuenta, es el que la mera imputación de un partido político por un determinado delito podría suponer la adopción de unas medidas cautelares que implicaran la clausura temporal de locales o establecimientos, la suspensión de actividades o la intervención judicial, lo que implicaría una importante merma reputacional que generaría en ocasiones un irreparable daño a la organización política ante la lentitud que caracteriza a la justicia española¹¹⁰.
- c) Por último, además, se pueden originar igualmente inconvenientes a la hora de individualizar la pena para una organización política, al tener necesariamente el órgano jurisdiccional competente que tener presente lo establecido en el art. 66 bis CP. Respecto de los criterios que en el citado precepto se recogen, a la hora de imponer todas estas penas y su duración —excepto en la pena de multa— se deberán de ponderar por parte de jueces y tribunales, aquellos elementos presentes en el apartado primero del art. 66 bis CP, que en realidad de nuevo han sido diseñados para perseguir una criminalidad de carácter económica, esto es, la empresarial¹¹¹.

la multa, o la prohibición de obtener subvenciones», poniéndose como ejemplo el que «en vez de decretarse la suspensión de actividades del partido político que sólo a nivel estatal posea personalidad jurídica, suspensión que alcanzaría a cada una de sus formaciones (autonómicas, locales, etc), debería optarse por imponer tal pena solamente a aquel «partido» en cuyo ámbito se hubieran producido los hechos delictivos».

¹⁰⁸ Gimeno Beviá, J., «Problemas que plantea el enjuiciamiento penal de los partidos políticos», *Revista General de Derecho Procesal*, n. 43, 2017, p. 20. Vid. también, Baucells Lladós, J., «Corrupción y responsabilidad...», cit., p. 25. Vid. además, Del Moral García, A., ob. cit., p. 303, Vid. por último, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 411. Sin embargo, Santana Vega, D. M., ob. cit., p. 340, se muestra crítica con la imposición de esta pena al argumentar que «esto supone una despatrimonialización de los partidos políticos, ya que, por lo general, los perjudicados se dirigirán contra el patrimonio del partido político, menoscabando así la función de instrumento de participación política —el aspecto público del partido político— y con ello la defensa del ideario que sostiene, y con un claro perjuicio para la inmensa mayoría de la militancia por la actuación de unos pocos —por lo general, la cúpula de dirigentes del partido o tesoreros».

¹⁰⁹ Vid., Del Moral García, A., ob. cit., p. 316. Vid., además, Santana Vega, D. M., ob. cit., p. 339. Vid. por último, Maza Martín, J. M., ob. cit., pp. 449-450.

¹¹⁰ Así lo señala Gimeno Beviá, J., ob. cit., pp. 19-20. Vid. también, Del Moral García, A., ob. cit., p. 316, quien llega a afirmar que en realidad «el auténtico contenido disuasorio del sistema de penalidad será la merma reputacional y el desprestigio social y como consecuencia de ello electoral. Es una especie de represión pública, aunque no aflore como penalidad oficialmente». Vid. además, Camacho Vizcaíno, A., Cortés Labadía, J. P., ob. cit., p. 6.

¹¹¹ Vid. a este respecto, Baucells Lladós, J., «Corrupción y responsabilidad penal...», cit., p. 11, quien explica que la medida de disolución se podrá imponer «probablemente sólo y únicamente para —siguiendo los criterios previstos en el art. 66 bis CP— supuestos

En este sentido señala Sandoval Coronado que hay dudas acerca de si «los órganos jurisdiccionales tendrían en cuenta, tal y como aquí se propone, no tanto los efectos de la pena para los trabajadores como sí *las consecuencias político-constitucionales* de la disolución de un partido político»¹¹² puesto que en el art. 66 bis. 1º CP no lo contempla¹¹³. Efectivamente, este es otro claro ejemplo de los inconvenientes que plantea una genérica extensión de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas a los partidos políticos sin incluir ningún tipo de matización en la regulación.

2.5. *El genuino diseño de «compliance programs» para formaciones políticas españolas: insuficientes requisitos normativos*

En virtud de lo establecido en el art. 9 bis LOPP, los partidos políticos españoles «*deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal*»¹¹⁴. Esto implica, que este tipo de entidades deberán diseñar e implementar un eficaz e idóneo modelo de organización y gestión de riesgos delictivos, también denominado programa de cumplimiento penal o en terminología anglosajona «criminal compliance», que permita, en definitiva, detectar y prevenir a

---

donde se exija en el partido una estructura claramente criminógena sin ningún tipo de cultura de cumplimiento y con varios dirigentes del mismo responsable de hechos criminales». Vid, también, Sandoval Coronado, J. C., ob. cit., pp. 170-171, quien afirma que «la reiteración delictiva, por más reprochable que sea, y pesa a la cualificación que se exige, no debe conducir irremediamente a la disolución de un partido político, ya que, teniendo en cuenta el carácter facultativo de la disolución, en su lugar se pueden emplear otras sanciones que aseguren un importante rendimiento preventivo especial negativo como, por ejemplo, la suspensión temporal de actividades o la clausura de locales y centros partidarios».

¹¹² Sandoval Coronado, J. C., Ob. cit., p. 169.

¹¹³ A estos efectos establece el art. 66 bis CP: «*En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como las siguientes:*

1.º En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en la letra b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá que tenerse en cuenta:

- a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva y sus efectos.*
- b) Sus consecuencias económico y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.*
- c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física o el órgano que incumplió el deber de control.».*

¹¹⁴ Esta previsión fue introducida por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.

tiempo la comisión de ilícitos penales en el seno de una organización política¹¹⁵. En realidad, ello supone una verdadera peculiaridad en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, para esta clase de personas jurídicas, el programa de cumplimiento penal no queda configurado como un acto facultativo¹¹⁶, sino como un mandato imperativo por parte del legislador penal español¹¹⁷, lo que supone una importante diferencia respecto al resto de personas jurídicas. En este sentido, dadas las consecuencias tan gravosas que hemos analizado que pueden llegar a producirse en el caso de que una formación política sea considerada responsable de un delito, no cabe duda de que su obligación de implementación está más que justificada¹¹⁸.

Así, el legislador ha establecido la obligación para los partidos políticos españoles de disponer de un programa de cumplimiento penal —si bien ello no ha venido acompañado de sanción alguna en caso de incumplimiento¹¹⁹—, remitiéndose a estos efectos a lo establecido en el art. 31 bis CP, un precepto éste que introduce una cláusula de exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas cuando éstas se doten de un eficaz y adecuado «criminal compliance» que cuente con una serie de elementos mínimos establecidos en el apartado quinto del citado precepto.

No obstante, coincidimos con la doctrina cuando pone de manifiesto que no cualquier programa de cumplimiento penal provocará automáticamente el efecto eximente que se contempla en nuestro principal texto

---

¹¹⁵ Coincidimos con De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 371, cuando afirma que «la eficacia e idoneidad son dos rasgos esenciales de los *compliance programs*».

¹¹⁶ Seminara, S., «Compliance y Derecho penal: la experiencia italiana», en Mir Puig, S., Corcoy Bidasolo, M., Gómez Martín, V. (dirs.), *Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción penal*, Madrid: Edisofer, 2014, p. 139. Vid, también, Mazzacuva, F., «Funciones y requisitos del modelo organizativo en el ordenamiento jurídico italiano: el problema del juicio de adecuación», en Palma Herrera, J. M. (dir.), *Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica*, Madrid, Dykinson, 2014, p.73, quien señala que en Italia a veces este hecho también ocurre y es que, en este sentido, «en la legislación local y en las fuentes administrativas (como, por ejemplo, en la regulación de la Bolsa) este cumplimiento viene configurado con naturaleza efectivamente obligatoria».

¹¹⁷ Vid, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 452, quien afirma que «es el único supuesto en el que *ex lege* se establece, para una determinada clase de personas jurídicas como los partidos políticos, una exigencia semejante, de modo que ya no se trata de una mera posibilidad, a través de la cual pueda evitarse, por vía eximente, la declaración de la responsabilidad penal (art. 31 bis 2 CP), sino de un requisito para la existencia misma de la organización». Vid., también, en este sentido De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 373.

¹¹⁸ Camacho Vizcaíno, A., Cortés Labadía, J. P., ob. cit., p. 8. Vid., igualmente, De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 372, quien sostiene que «en este contexto, por razones de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, para evitar sanciones penales y para mejorar la imagen ante la ciudadanía y el electorado, los partidos políticos deben introducir en su funcionamiento interno *compliance programs* de manera inexcusable».

¹¹⁹ Vid. en este sentido, León Alapont, J., «Partidos Políticos y responsabilidad...», cit., pp. 179-180.

punitivo¹²⁰. Esto significa que en el diseño y ejecución del «*criminal compliance*» es necesario atender a las genuinas características de los partidos políticos, pues sólo así su configuración será la adecuada y podrá sea eficaz e idóneo a la hora de prevenir la corrupción de esta clase de organizaciones¹²¹. Si bien, tenemos que tener siempre presente que ningún programa de cumplimiento penal, por perfecto que pueda parecer, podrá prevenir un delito cuando haya una expresa resolución delictiva a favor de éste por parte de la formación política¹²².

La importancia que estos modelos de organización y gestión de riesgos delictivos pueden tener para el caso de los partidos políticos ha sido ya puesto de manifiesto a través de diferentes procedimientos judiciales en los que han sido investigados en nuestro país esta clase de organizaciones por su presunta implicación en diferentes ilícitos penales:

- a) Así, por ejemplo, en el caso de la imputación del PP por el delito de daños informáticos, éste se llegaba a atribuir porque se argumentaba que este partido político no había establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito, toda vez que todavía en las fechas en las que se investigó no existía un inventario de elementos informáticos en su sede —presumiéndose, por tanto, que lo que había en su interior era del Partido—, no existiendo tampoco un Protocolo interno de seguridad, lo que permitió, en palabras del órgano jurisdiccional «que personas en su organización cometiesen el delito descrito»¹²³. Esto mismo, fue lo argumentado en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 909/2017, de 3 de noviembre de 2017, que confirma el anterior auto de transformación de diligencias pre-

---

¹²⁰ Vid, en este sentido, De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 371. Vid., también, León Alapont, J., «Partidos Políticos y responsabilidad...», cit., p. 180, quien, con criterio afirma que «la clave de éxito de tales sistemas de prevención de delitos residirá en si los partidos adquieren un compromiso auténtico para erradicar conductas delictivas en su ámbito, esto es, que asuman o tomen conciencia de la denominada «cultura de cumplimiento de la legalidad» o si, por el contrario, sólo se conciben como escudo frente a eventuales responsabilidades penales (lo cual puede degenerar en la aprobación de *compliance programs* meramente «cosméticos»)».

¹²¹ Afirma acertadamente Gimeno Beviá, J., ob. cit., p. 17, a este respecto que «en atención a lo dispuesto en el farragoso art. 31 bis 5 CP, los partidos políticos deberán contar con un modelo (...) prestando especial atención a sus peculiaridades respecto de las empresas». Esta cuestión es ampliamente abordada por Morales Hernández, M. A., «Propuesta de «criminal compliance» para partidos políticos españoles: su adaptación al artículo 31 bis. 5 del Código Penal». *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 24, 2022, pp. 8-36.

¹²² En este sentido, vid. Cugat Mauri, M., «La reforma de responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel del juez ante el peligro de hipertrofia de los *compliance*», *Estudios penales y Criminológicos*, vol. XXXV, 2015, pp. 941-943, quien hace hincapié en la idea de que «ni el mejor modelo de gestión evita la comisión de fraude».

¹²³ Vid, Fundamento Jurídico Primero del Auto del Juzgado de Instrucción núm. 32 de Madrid, de 26 de julio de 2016.

vias, llegando a afirmar al respecto que «lo que tiene que resultar en todo caso de la instrucción es «un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica» tal y como ha argumentado el TS, un defecto éste, argumenta el órgano judicial, que resulta indiciariamente en el supuesto examinado»¹²⁴. Sin embargo, como ya hemos visto, en este caso se termina produciendo la absolución de este partido político por el delito de daños informáticos que se le imputaba, argumentándose precisamente en la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 31 de Madrid, núm. 267/2019, de 4 de septiembre de 2019, que «se ha demostrado que en el funcionamiento interno del partido no se manifestó ninguna deficiencia estructural en los mecanismos de prevención y control exigibles y destinados a evitar la comisión de delitos de daños informáticos, en relación con el tratamiento de datos de los equipos»¹²⁵.

- b) También la cuestión de los «criminal compliance» está presente en el procedimiento que se abrió contra el partido político CDC —y PDeCat como continuador del mismo— a través del Auto del Juzgado De Instrucción de 27 de julio de 2018, investigándose posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. En la citada resolución judicial se llega a afirmar que «CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pueda ser sometido a verificación e informe», concluyéndose que este partido «carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en

¹²⁴ Vid. Razonamiento Jurídico Cuarto del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 909/3017, de 2 de noviembre de 2017.

¹²⁵ Vid. Fundamento de Derecho Quinto, apartado cinco, de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 31 de Madrid núm. 267/2019, de 4 de septiembre de 2019, en donde se explica que «en la definición de estos mecanismos, el referente no puede ser otro que la legislación en materia de protección de datos y su desarrollo reglamentario (...). A su vez, para la traslación de ese marco legal a la realidad de las entidades y organizaciones, es inevitable recurrir a las diversas guías de buenas prácticas disponibles en el ámbito internacional; entre otras, por ejemplo, (...) de la guía de INTECO (en la época de los hechos), elaborada por un organismo público», llegando a la conclusión tras la exposición de otra serie de consideraciones que «estas conclusiones probatorias impiden apreciar que el Partido Popular hubiera incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de sus empleados, cuya finalidad fuera la de evitar la comisión de un delito de daños informáticos».

concepto de donación»¹²⁶. Se señala, además, que determinados responsables «pese a ser conocedores de la existencia de esta operativa de financiación ilícita, en la que se utilizaban a fundaciones vinculadas al partido como «sociedades interpuestas» a través de la cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulaban corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años», llegándose a la conclusión de que «los hechos relatados evidencian la inexistencia en el partido de un modelo de organización y gestión o, en su defecto, cualquier mecanismo meramente eficaz de control que incluyera las medidas de vigilancia idóneas para prevenir la comisión de este tipo de conductas»¹²⁷.

No obstante, podemos plantearnos si en realidad los elementos que deben estar presentes según la normativa actual en los «criminal compliance» de los partidos políticos son los adecuados, puesto que de nuevo hemos de advertir que, en realidad, se trata de unos requisitos también ideados para prevenir la criminalidad en organizaciones de corte empresarial, no la criminalidad genuina de las formaciones políticas vinculadas esencialmente a la corrupción. En realidad, no se han tenido en cuenta al elaborar estos requisitos que este tipo de entidades presentan sus propias fuentes de financiación, sus propios riesgos delictivos, un funcionamiento interno particular y, muchas de ellas, una compleja organización territorial. Así, a nuestro modo de ver, sería importante exigir para los «criminal compliances» de estas genuinas organizaciones una serie de elementos adicionales —aparte de seguir requiriéndoles los ya existentes— que, si no son adoptados por éstas, les impediría obtener una exención de responsabilidad criminal en un eventual procedimiento judicial. Con ello nos aseguramos, que la adopción de tales medidas no quedara a voluntad de la organización política, pues se trataría de determinadas medidas que consideramos realmente eficaces a la hora de combatir las prácticas delictivas que tienen lugar en el seno de esta clase de persona jurídica. En relación a ello, en primer lugar, resulta conveniente exigir medidas relativas a la transparencia puesto que, como hemos visto, el principal riesgo que presentan estas entidades procede de que en ellos se produzcan inaceptables comportamientos vinculados al fenómeno de la corrupción política. Una buena medida, en este sentido, podría ser el exigir que las organizaciones políticas publicaran de forma accesible determinada información de carácter económico-financiera relativa a su

---

¹²⁶ Vid. Razonamiento Jurídico Tercero del Auto del Juzgado Central de Instrucción de 27 de julio de 2018.

¹²⁷ *Ibíd.*

financiación¹²⁸, incluida la de sus subunidades. En segundo lugar, debería exigirse determinadas medidas de prevención adicionales respecto al requisito relativo a los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad del partido político, y la adopción de decisiones y ejecución de éstas, todo ello amparado por el art. 6 CE que dispone respecto a estas organizaciones que su «estructura y funcionamiento deberán ser democráticos». Una medida que consideramos adecuada sería, por ejemplo, obligar al partido político a establecer mecanismos democráticos que garanticen una mayor participación de los afiliados en la toma de decisiones. En tercer lugar, consideramos adecuado requerir igualmente medidas específicas respecto al requisito contemplado en el art. 31 bis.5. 3.º CP, relativo a la disposición por parte del partido de modelos de gestión de recursos financieros adecuados, puesto que los riesgos más importantes que va a tener este tipo de entidad proceden del ámbito financiero. Una buena medida, a este respecto, podría ser el obligar al partido político a establecer auditorías internas —en los que participen los propios afiliados— y auditorías externas anuales.

3. Las peculiaridades que presenta la responsabilidad penal para partidos políticos en determinados países de nuestro entorno

Para finalizar el análisis que estamos llevando a cabo en relación a la responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas, queremos ahora detenernos en examinar la legislación penal existente en determinados países de nuestro entorno que admiten esta clase de responsabilidad penal en relación a este tipo de organizaciones. El objetivo a este respecto, no es otro que el de comprobar si se ha contemplado o no alguna particularidad en el derecho comparado en relación a esta cuestión¹²⁹.

---

¹²⁸ Nos mostramos, en este sentido, completamente de acuerdo con Núñez Castaño, E., «Sobre la legitimidad de la tipificación penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos en el marco de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción», en Gómez Rivero, M. C, Barrero Ortega, a. (dirs.), *Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, p. 735, cuando señala que, al ser su financiación uno de los temas más conflictivos para un partido político, una falta de transparencia relativa tanto a sus ingresos como a sus gastos generará una importante ausencia de control respecto de sus finanzas y actividades.

¹²⁹ Vid., en este sentido, León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., p. 64, quien señala que del «examen de los distintos sistemas de responsabilidad penal de los partidos políticos podrán extraerse propuestas de mejora para la regulación española».

3.1. El caso francés

Un primer país de interés en esta materia es Francia, en cuyo Código penal —«*Code pénal*»—, se admite, por mor del art. 121-2¹³⁰, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la que únicamente se excluye al Estado¹³¹, por lo que la misma se puede extender también a partidos políticos¹³². Por lo tanto, esta clase de entidades, pueden ser criminalmente responsables de aquellos delitos que así lo admitan¹³³ y ello desde el momento de su creación y durante toda su existencia¹³⁴. Así, en el país galo, al ser la responsabilidad acumulativa, se podría atribuir responsabilidad criminal tanto a las personas físicas integrantes de un órgano o representante de la organización política como al propio partido político, siempre y cuando en este último caso el ilícito penal se haya cometido a su cuenta¹³⁵. En cuanto a las penas a imponer a esta clase de entidades, hay que tener presente que en virtud de lo establecido en el apartado final del art.

¹³⁰ Señala este precepto que:

«Las personas jurídicas, a excepción del Estado, son penalmente responsables, conforme a lo dispuesto en los artículos 121-4 a 121-7, de los delitos cometidos, en su nombre, por sus órganos o representantes.

Sin embargo, los entes territoriales y sus agrupaciones sólo son responsables penalmente de los delitos cometidos en el ejercicio de las actividades que puedan ser objeto de convenios de delegación de servicio público.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas que sean autoras o cómplices de los mismos hechos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 121-3».

¹³¹ Así lo afirma Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 407, señalando que «la única exclusión respecto de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas la constituye el Estado, de conformidad con el art. 121.1 CP, por lo que los partidos políticos pueden ser declarados penalmente responsables».

¹³² Poelemans, M., «*Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso francés*», *Eguzkilore: Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología*, n. 28, 2014, p. 116. Se explica aquí que «todas las personas de derecho privado que tienen la personalidad jurídica pueden ser responsables penalmente tengan como objetivo la búsqueda del lucro o no», cubriendo esta interpretación extensiva a «entidades tan diversas como las sociedades civiles o comerciales, los agrupamientos de interés económico, las asociaciones, los sindicatos, las fundaciones, los partidos políticos».

¹³³ En este sentido, vid. Donaires Sánchez, P., «Responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho comparado», *Derecho y Cambio Social*, Año 10, n. 31, 2013, p. 11, quien explica que es «necesario, para poder responsabilizar al ente (...) que, tal posibilidad haya sido previsto en el propio texto que tipifica la infracción delictual o contravencional que se quiera aplicar».

¹³⁴ De esta manera lo señala Planque, J-C., *La détermination de la personne morale pénalmente responsable*, Paris, L'Harmattan, 2003, p. 69, quien además explica que la única cuestión que puede plantearse es que pasaría si el partido se disolviera con el único fin de evitar un proceso penal, proponiéndose como solución a ello el acudir a la persona jurídica de hecho.

¹³⁵ De esta manera lo señala Donaires Sánchez, P., ob. cit., p. 11. Vid. ampliamente, esta cuestión en Renout, H. *Droit penal general*. 18^a ed. Bruxelles: Larcier, 2013, pp. 179-190.

131-30 del Código Penal francés, «*las sanciones definidas en los puntos 1º y 3º anteriores no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público en las que se pueda incurrir en responsabilidad penal. No son aplicables ni a los partidos políticos ni a los sindicatos profesionales*». Se excluye, en definitiva, para las organizaciones políticas aquellas sanciones más graves como son la disolución o la intervención judicial, sí admitiéndose, en cambio, la pena de multa u otras sanciones como la confiscación¹³⁶.

3.2. *El caso austriaco*

Un segundo país de interés en esta materia es Austria, que regula la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley de Responsabilidad Asociativa —«*Verbandsverantwortlichkeitsgesetz*»—. Así, en el párrafo § 1 de la citada norma¹³⁷ se establece un extenso ámbito subjetivo de aplicación que alcanza también a los partidos políticos¹³⁸. Así, en virtud del citado precepto este tipo de entidades podrían responder criminalmente por delitos si bien, tal y como señala Campagna, la multa es la principal y casi única pena prevista¹³⁹.

3.3. *El caso rumano*

Un tercer país de interés es Rumanía, en donde se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su Código Penal —«*Codul Penal die 17 iulie 2009*»— a través de sus arts. 135 y ss. De esta manera,

¹³⁶ De esta manera lo señala Gimeno Beviá, J., ob. cit., p. 9. Vid., también, Poelemans, M., ob. cit., p. 122.

¹³⁷ Establece el §1 de la AORC que:

«(1) *La presente Ley Federal regula las condiciones en la que las asociaciones son responsables de delitos penales y el modo en que son sancionadas, así como el procedimiento por el que se establece la responsabilidad y se imponen las sanciones. A los efectos de la presente ley, un delito penal es un acto punible por un tribunal en virtud de la ley federal o provincial; sin embargo, la presente ley federal se aplicará a los delitos financieros sólo en la medida prevista en el Ley de delitos financieros, Boletín oficial Federal Nr. 129/1958,*

(2) *Las asociaciones en el sentido de esta ley son personas jurídicas, así como las asociaciones registradas y Agrupaciones Europeas de Interés Económico.*

(3) *No son asociaciones en el sentido de esta ley.*

1. *El Estado.*

2. *El Gobierno Federal, los Länder, los municipios y otras entidades jurídicas, en la medida en que actúen en ejecución de la ley*

3. *Las iglesias, las sociedades religiosas y las confesiones religiosas reconocidas, en la medida en que actúen con carácter pastoral».*

¹³⁸ Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 407. De esta manera lo indica también León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., p. 65.

¹³⁹ Campagna, F., «Corporate Criminal Liability in the Austrian Legal System», en Fiorella, A. (edr.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Vol. I. Liability «ex crimine» of Legal Entities in Member States*, Napoli: Jovene Editore, 2012, pp. 386-387.

una persona jurídica puede ser criminalmente responsable de los ilícitos penales cometidos en el ejercicio de su actividad o en el interés de la persona jurídica o en su nombre, no excluyendo la responsabilidad penal de la persona jurídica la de la persona física que haya contribuido a la comisión del mismo hecho. Además, esta clase de responsabilidad podría ser extendida a partidos políticos¹⁴⁰ puesto que en virtud de lo señalado en el citado texto punitivo rumano¹⁴¹, las únicas exclusiones que se realizan a este respecto son el Estado y las entidades de Derecho Público¹⁴². No obstante, en virtud de lo establecido en el art. 141 del Código Penal Rumano se excluye la posibilidad de imponer a las organizaciones políticas determinadas penas como la disolución o la suspensión de su actividad¹⁴³.

3.4. *El caso croata*

Un último país de interés en nuestro análisis es Croacia, que regula esta cuestión en la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas por delitos penales —«*Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela*», estableciéndose aquí los criterios de atribución de esta clase de responsabilidad en sus arts. 3¹⁴⁴ y 4¹⁴⁵. En particular, entre las pocas exclusiones

---

¹⁴⁰ No obstante, tal y como señala Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 406, en la práctica judicial no se ha producido ningún supuesto «de exigencia de responsabilidad penal a partido político alguno».

¹⁴¹ Se dispone en el art. 135 del Código Penal Rumano respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que: «(1) Una persona jurídica, a excepción del Estado y de las autoridades públicas, será responsable penalmente de los delitos cometidos en el ejercicio de su actividad o en interés de la persona jurídica o en su nombre. (2) Las instituciones públicas no serán responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de una actividad que no puede ser objeto de propiedad privada. (3) La responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye la responsabilidad penal de la persona física que haya contribuido a la comisión del mismo hecho».

¹⁴² Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 406.

¹⁴³ Vid., en este sentido, Damaschin, M., Gorunescu, M., «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso Rumano», *Eguzkilore: Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología*, n. 28, 2014, pp. 159-160, quien explica que «la pena complementaria de disolución o suspensión de actividades no puede aplicarse a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones religiosas, organizaciones de minorías nacionales, organizaciones de trabajadores, ni a personas jurídicas que realicen su actividad en los medios de comunicación».

¹⁴⁴ A este respecto señala el art. 3 de esta ley que «(1) La persona jurídica será sancionada por un delito de una persona responsable si tal delito viola cualquiera de los deberes de la persona jurídica o si la persona jurídica ha obtenido o debería haber obtenido un beneficio ilícito para sí misma o para un tercero. (2). En las condiciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, la persona jurídica será sancionada por los delitos previstos en el Código Penal y otras leyes que prescriben delitos penales».

¹⁴⁵ En segundo lugar, su art. 4 dispone que «La persona responsable en el sentido de esta ley es una persona física encargada de las operaciones de la persona jurídica o encargada de las tareas del ámbito de operaciones de la persona jurídica».

que contempla¹⁴⁶ no se encuentran los partidos políticos, por lo que éstos podrán incurrir en responsabilidad criminal si se dan los requisitos establecidos en la citada Ley¹⁴⁷. Por otro lado, esta norma contempla que los partidos políticos podrán ser sancionados de diversos modos: a través de multas (arts. 9, 11 y 19)¹⁴⁸; con la prohibición para obtener licencias, autorizaciones, concesiones y subvenciones (art. 17); a través de la prohibición de transacciones con beneficiarios de los presupuestos nacionales o locales (art. 18); y con el pronunciamiento público de sentencia (art. 21). Se establece eso sí la exclusión para partidos políticos de determinadas penas como son la extinción de la persona jurídica¹⁴⁹ y la prohibición de realizar determinadas actividades u operaciones¹⁵⁰.

4. ¿Se debe admitir que los partidos políticos españoles puedan ser responsables de delitos como personas jurídicas?

La inclusión de los partidos políticos en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas no ha estado exenta de polémica. En la actualidad, se sigue produciendo un controvertido debate doctrinal acerca de si la decisión finalmente adoptada por parte del legislador ha sido la correcta o no.

4.1. Los argumentos doctrinales en contra de su inclusión

Un sector doctrinal se muestra contrario a admitir la extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al caso particular de los partidos políticos. Se basan para ello en diferentes motivos.

¹⁴⁶ Se dispone en el art. 6 de esta ley que: «(1) *La República de Croacia como persona jurídica no podrá ser castigada por un delito.* (2) *Las unidades de autogobierno local y regional sólo podrán ser castigadas por delitos penales que no se hayan cometido en el ejercicio de la autoridad pública.*».

¹⁴⁷ Vid., en este sentido, Gimeno Beviá, J., ob. cit., p. 9.

¹⁴⁸ De hecho, ya se ha impuesto una multa a un partido político de este país, como ha sido a la Unión Demócrata Croata (DHZ) por un delito de financiación ilegal cometido por su presidente. Vid, en este sentido, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 407 quien explica que a este proceso judicial se le ha llegado a calificar por parte de la doctrina especializada como un «experimento», siendo el mismo objeto de fuertes críticas. Vid., también, Gimeno Beviá, J., ob. cit., pp. 9-10. Vid., además, León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., p. 71.

¹⁴⁹ De esta manera lo dispone el art. 12 de la citada ley en su apartado 2 al disponerse que «*La sanción de la extinción de la persona jurídica no podrá ser pronunciada en unidades de local y regional autogobierno, partidos políticos y sindicatos.*».

¹⁵⁰ De esta forma lo señala el art. 16, en su apartado tercero, al indicarse que «*La prohibición de realizar determinadas actividades o transacciones no podrá imponerse a las unidades de autogobierno local o regional y a los partidos políticos.*».

- a) En primer lugar, se considera que la inclusión de estas organizaciones en este régimen de responsabilidad penal generará en un futuro evidentes problemas en su aplicación, al no haberse tenido en cuenta las particulares características de esta clase de entidades, ocurriendo ello tanto en el plano del derecho penal material como en el plano del derecho procesal. Así, por un lado, Santana Vega afirma que dado el elevado número de partidos políticos inscritos en España «el establecimiento de la responsabilidad penal de todos ellos de manera general, sin atender a sus niveles de implantación o dimensiones, supone ya, de por sí, una defectuosa articulación del fin político-criminal que afirmaba perseguir en la LO 7/2012, al incluir dentro de las entidades susceptibles de responsabilidad penal a los partidos políticos»¹⁵¹. Además, respecto a este extremo, se pone igualmente de manifiesto por parte de la doctrina cómo se generan relevantes problemáticas en el plano procesal, poniéndose en duda la eficacia de los partidos políticos como sujetos pasivos¹⁵².
- b) En segundo lugar, también se ha argumentado el riesgo que puede suponer el extender este régimen de responsabilidad penal a estas peculiares personas jurídicas puesto que se podría llegar a judicializar aún más la vida política llevándose la lucha electoral a la sede judicial lo cual resultaría claramente contraproducente¹⁵³.
- c) En tercer lugar, la doctrina hace alusión a las inaceptables penas que podrían llegar a imponerse a una formación política¹⁵⁴ y que

¹⁵¹ Santana Vega, D. M., ob. cit., p. 318.

¹⁵² Gimeno Beviá, J., ob. cit., p. 6. Así, se explica en primer lugar, el que «no existe en el ordenamiento jurídico español una regulación especial o particular respecto a la determinación de la competencia cuando el delito es cometido por una persona jurídica, incluyendo naturalmente a los partidos políticos» (p. 11). En segundo lugar, se plantea también el problema de los aforamientos puesto que «ante la imputación del partido político y del miembro aforado como autores de la conducta típica sería necesario determinar si el procedimiento debe sustanciarse de manera separada o conjunta, y en este último caso, el órgano competente» (p. 12). En tercer lugar, por el peligro de «judicialización de la política al enfrentarse dos partidos políticos en la arena judicial», uno como acusado y otro ejerciendo una acción popular (p. 14).

¹⁵³ Del Moral García, A., ob. cit., p. 302. Vid., ampliamente esta cuestión en Astorloa Huarte-Mendicoa, I, Sieira Muciantes, S., «El control electoral de los partidos políticos» en Matia Portilla, F. J. (dir.), *Problemas electorales sobre el control de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, p. 199, en donde se explica que la justificación radicaba en «la conveniencia de no caer en el «gobierno de los jueces»: habida cuenta de las importantes funciones constitucionales que se reservan a los partidos políticos, podría razonablemente temerse que la utilización espuria del derecho penal pudiera servir, especialmente en la antecala de procesos electorales, como impedimento para el desarrollo de las mismas». En este mismo sentido vid. De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 333.

¹⁵⁴ Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 451.

podrían llegar a ser altamente perjudiciales para el correcto funcionamiento democrático de nuestro país¹⁵⁵.

- d) En cuarto lugar, se defiende también que existen otros mecanismos de control formal —e incluso informal— que pueden llegar a ser más eficaces que el derecho penal. En este sentido, lo llega a afirmar Baucells Lladós para quien esta inclusión «representa un ejemplo más de la tendencia por parte de los poderes públicos a recurrir compulsivamente al derecho penal para resolver todos los problemas políticos y sociales»¹⁵⁶.
- e) En quinto lugar, se sostiene de igual manera que ya existían previamente mecanismos suficientes para perseguir todos aquellos actos de corrupción política, puesto que, por un lado, se puede castigar a aquellos dirigentes que instrumentalizan a esta clase de organizaciones con objeto de lucrarse individualmente, y además, por otro lado, en caso de producirse un estado de corrupción generalizada en el seno del partido político, éste puede ser castigado a través de determinados ilícitos penales como son los delitos de asociación ilícita y el de organización criminal¹⁵⁷.

---

¹⁵⁵ De esta manera lo señala Santana Vega, D. M., ob. cit., p. 344, argumentándose a este respecto además que «la exclusiva atribución de responsabilidad penal a las personas físicas, favorecería la obtención de pruebas contra aquellos dirigentes corruptos, sin temer, ni comprometer la existencia y funcionamiento del partido político en cuestión por los actos de corrupción realizados por sus dirigentes o integrantes. A este respecto, conocida es la máxima que se maneja en la vida política de que «fuera del partido están los adversarios, dentro los enemigos»» (pp. 318-319). Vid. también, Gimeno Beviá, J., ob. cit., p. 4. Se afirma aquí que la protección que la CE brinda a los partidos políticos en su art. 6 queda menoscabada por el excesivo catálogo de actividades por las que este tipo de entes ahora pueden generar responsabilidad penal. Vid, por último, Maza Martín, J. M., ob. cit., p. 403, quien explica que este hecho supone una extralimitación por parte del legislador español que carece de toda razón al no responder ni siquiera a una obligación clara de índole internacional, poniéndose en riesgo el propio sistema político en su conjunto.

¹⁵⁶ Baucells Lladós, J., «Autorregulación y prevención del delito en los partidos políticos», *Revista General del Derecho Penal*, n. 28, 2017, p. 22.

¹⁵⁷ De esta manera lo afirma Santana Vega, D. M., ob. cit., p. 344, quien razona que «además, la percepción de la corrupción política, a la vista de los demás casos que han motivado la atribución de responsabilidad penal a los partidos políticos, no guarda proporción con el número de partidos que actúan en la vida política española, siendo suficiente para proscribir los nocivos efectos de la corrupción política la atribución de responsabilidad penal a los dirigentes que los instrumentalizan para fines corruptos y, por lo general también, con ánimo de lucrarse individualmente» (p. 318), argumentando además que para los casos de corrupción generalizada en un partido político se encuentra previsto ya en el art. 515 CP el delito de asociaciones, recogiendo también nuestro principal texto punitivo un tipo de organización criminal en el art. 570 bis, para el supuesto en que en el seno del partido un sector del mismo —territorio, corriente ideológica, etc.— se pusiera de acuerdo de forma estable o por tiempo indefinido, coordinadamente, con reparto de tareas, para llevar a cabo acciones criminales (p. 318).

4.2. Toma de postura: la existencia de sólidos argumentos doctrinales a favor de su inclusión

Frente al anterior planteamiento, existe también otro sector doctrinal, al que nos adherimos, que justifica la inclusión de los partidos políticos en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ello en base a distintos motivos:

- a) En primer lugar, se argumenta con razón, que la integración de esta clase de entidades en este régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas dota a las organizaciones políticas de un régimen de especial protección y también de especial control. En relación a este extremo, defiende Morillas Cueva, que su sujeción a esta clase de responsabilidad vendría dada por la especial relevancia constitucional que los partidos políticos ostentan en nuestro ordenamiento jurídico, dadas las funciones que éstos tienen encomendados en el sistema español de partidos¹⁵⁸.
- b) En segundo lugar, la doctrina científica igualmente defiende que no hay motivo alguno que permita negar la posible imputación de delitos a partidos políticos de acuerdo con el lenguaje y técnica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiéndose con ello, el control de actuaciones ilícitas por parte de éstos a través de un poder independiente, como es el judicial¹⁵⁹. Además, en este sentido, es necesario tener presente que las formaciones políticas no pueden ser consideradas como administraciones públicas, unas entidades esas últimas que son el único tipo de personas jurídicas actualmente excluidas bajo el razonamiento de que es necesario evitar que el propio Estado actúe contra sí mismo a través del derecho penal¹⁶⁰. Por todo ello, se considera que no habría

¹⁵⁸ Morillas Cuevas, L., «La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», *Anales del Derecho*, n. 29, 2011, p. 26.

¹⁵⁹ Quintero Olivares, G., «La responsabilidad penal de los Partidos como personas jurídicas», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, n. 859, 2013 p. 2. Vid, también, Baucells Lladós, J., «La responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas», en García-Arán, M., Botella, J. (dirs.), *Responsabilidad jurídica y política de los partidos en España*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 282-283.

¹⁶⁰ De esta manera lo afirma De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., pp. 331-332, argumentando que «algunas excepciones podían considerarse comprensibles, resultado natural de nuestra tradición jurídico-pública. Así, en el caso de las distintas Administraciones Públicas, entidades y organismos públicos, y de las empresas de derecho público, una recta comprensión del principio de división de poderes desaconsejaba que el Estado, que ejerce el *ius puniendi*, lo aplicara también contra sí mismo», matizándose eso sí que «por supuesto cuando en el seno de estas estructuras públicas se cometiesen ilícitos penales, habría responsabilidad penal, pero imputable a la persona física —funcionario— responsable de los hechos». Vid., en este mismo sentido, Gómez-Jara Díez, C., «Sujetos sometidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas», en *Responsabilidad penal de las personas jurídica. Aspectos sustantivos y procesales*, Madrid, La Ley, 2011, p. 53.

razón alguna para una exclusión de las organizaciones políticas en este régimen de responsabilidad puesto que ello supondría una discriminación injustificada¹⁶¹.

- c) En tercer lugar, porque ello responde a una necesidad político-criminal de primer orden en nuestro país. De esta manera, lo argumenta con acierto León Alapont para quién esta inclusión no constituye un «Derecho penal simbólico» puesto que la criminalidad en el seno de este tipo de entidades ha estado presente en España desde los años ochenta¹⁶². Efectivamente, especialmente, en la última década han ido apareciendo una excesiva cantidad de procedimientos judiciales vinculados a la corrupción que han afectado de lleno a formaciones políticas de todo color, en los que los delitos que se investigaban transcendían, tal y como defiende, De Pablo Serrano, la voluntad delictiva de las personas físicas y eran representativas, en realidad, «de un estado mental colectivo y de un modelo de organización»¹⁶³.
- d) En cuarto lugar, también se ha puesto de manifiesto, a nuestro juicio acertadamente, cómo a nivel dogmático la inclusión de este tipo de organizaciones en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas estaría completamente justificado en virtud de los principios de necesidad e idoneidad que rigen en el Derecho Penal, siendo además ello coherente con el principio de ofensividad y ultima ratio del Derecho Penal¹⁶⁴. No debemos olvidar que este tipo de comportamientos que se pueden producir en el seno de las organizaciones políticas son muy graves al poder con ello verse alterado el correcto funcionamiento democrático del estado y se debe, por tanto, trascender el ámbito administrativo sancionador. Máxime, si tenemos presente que los diferentes mecanismos extrapenales que se han ido implementando han resultado claramente insatisfactorios a la hora de sancionar y prevenir este tipo de conductas que se han ido produciendo, como decimos, constantemente en las organizaciones políticas¹⁶⁵.

¹⁶¹ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., pp. 345-346.

¹⁶² León Alapont, J., *La responsabilidad penal...*, cit., pp. 171-172.

¹⁶³ De Pablo Serrano, A. L., ob. cit., p. 344.

¹⁶⁴ Vid., en este sentido, Macías Espejo, B., «La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 130, 2020, p. 108, en donde se señala que «aunque lo ideal sería no acudir al ámbito penal por ser la última ratio del Ordenamiento jurídico, la propia inobservancia de las obligaciones extrapenales hace necesario el control en este ámbito».

¹⁶⁵ Vid., en este sentido, Maroto Calatayud, M. «Autorregulación y legitimidad corporativa: Democracia interna y control social en partidos políticos y empresas», en Arroyo Jiménez, L., Nieto Martín, A. (dirs.), *Autorregulación y sanciones*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi Thomson Reuters, 2015, pp. 369-418, quien señala que «los partidos han demostrado (...) una gran capacidad para escapar de los mecanismos de control».

- e) En quinto lugar, otro argumento viene dado por el análisis que hemos realizado de derecho comparado, puesto que esta posibilidad viene contemplada en diversos países de nuestro entorno. En este sentido, países como Francia, Austria, Rumanía o Croacia, que cuentan con una tradición jurídico-penal continental muy próxima a la de nuestro ordenamiento jurídico, permiten extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas al caso de los partidos u organizaciones políticas, si bien todos ellos contemplan determinadas peculiaridades en lo que se refiere a las penas.
- f) En sexto lugar, *por la existencia de obligaciones de índole internacional en esta materia*. En relación a esta cuestión, el Consejo de Europa insistía en la necesidad de instaurar un sistema de control interno de financiación de partidos políticos para dar cumplimiento con el informe GRECO de 2013 sobre corrupción vinculada a los partidos políticos en España¹⁶⁶. Y ello se ha llevado a cabo en nuestro país, a través de la aprobación de un precepto, el art. 9 bis LOPP, que prevé la obligación para este tipo de entidades de establecer un programa de cumplimiento penal que permita prevenir delitos en esta clase de organizaciones. Puede, cierto es, que se haya dado una respuesta a la citada obligación de una manera mucho más contundente que la exigida, pero ello no puede más que contemplarse, a nuestro modo de ver, de una forma positiva, puesto que a través de este tipo de instrumentos de autorregulación no sólo se controla la financiación de este tipo de entidades, sino que su fiscalización se realiza de forma más exhaustiva en diferentes ámbitos¹⁶⁷.
- g) En séptimo y último lugar, la obligación de dotarse con un «criminal compliance» contribuirá, sin ningún género de dudas, a evitar la aparición de delitos¹⁶⁸ en el seno de este tipo de organizaciones,

---

Vid., igualmente, Delgado Del Rincón, L. E., «Hacia un modelo idóneo de control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas», en Matia Portilla, F. J. (dir.), *Problemas actuales sobre el control de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 423-470, quien respecto del control externo del Tribunal de Cuentas a los partidos políticos, señala que «las insuficiencias y omisiones legislativas en esta materia han sido una constante».

¹⁶⁶ Vid., a este respecto esta cuestión en : <https://www.hayderecho.com/2013/10/20/informe-greco-a-examen-de-la-financiacion-de-los-partidos-politicos-espanoles-ii-el-pay-to-play/> (consultado el 28.07.2022).

¹⁶⁷ Vid., en este sentido, Baucells Lladós, J., «La responsabilidad penal...», ob. cit., p. 103, quien explica que «en un contexto tan deficiente de autorregulación como el de los partidos políticos, la introducción de su responsabilidad penal —y sobre todo, la de su exención por contar con «programas de cumplimiento» puede promover la implementación de los mecanismos de prevención y reacción de la actividad delictiva en su interior». Vid., además, Maroto Catatayud, J., *La financiación ilegal de partidos políticos: Un análisis político-criminal*, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 333 y ss.

¹⁶⁸ Vid, Gálvez Jiménez, A, «Prevención del delito y planes de cumplimiento en el marco de los partidos políticos», en Morillas Cueva, L. (dir), *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política*, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 415-416, en donde se señala que

acentuándose, por tanto, la prevención, detección y sanción de éstos¹⁶⁹ e incluso la democratización de las formaciones políticas¹⁷⁰, puesto que se obliga a que estos adopten variadas medidas en este ámbito¹⁷¹.

En definitiva, existen múltiples razones por las que resultaría positivo mantener el actual régimen de responsabilidad penal de los partidos políticos. Innegable es que se pueden hacer muchas críticas a esa genérica extensión que el legislador ha realizado en este ámbito, pero, sin embargo, todo ello se puede solucionar con una revisión del actual modelo de atribución de responsabilidad penal para esta clase de organizaciones, introduciendo todos aquellos cambios legislativos necesarios que permitan adaptarse a estas genuinas entidades¹⁷².

«la introducción de un precepto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos que obliga a adoptar programas de cumplimiento está justificada», puesto que «el rol institucional que desarrollan los partidos políticos en la vida cotidiana permite exigirles un plus de diligencia a la hora de prevenir delitos».

¹⁶⁹ Gómez Tomillo, M., ob. cit., p. 61. Vid., también, Baucells Lladós, J., «Autorregulación y prevención...», cit., p. 24.

¹⁷⁰ Así lo señala Maroto Calatayud, M., *La financiación ilegal...*, cit., p. 333. Argumenta este autor además que los *compliance* y su obligatoriedad servirían para «democratizar el funcionamiento de instituciones de tal relevancia política a través de la vía penal», razonándose al respecto que la deficiencia de origen y fracaso de los códigos éticos, códigos de buenas prácticas y comités de garantías de los principales partidos políticos, al estar exclusivamente concebidas como «estrategias de relaciones públicas y relegitimación» con fines de proyección mediática (pp. 334-339).

¹⁷¹ Vid, en este sentido, Del Rosal Blasco, B., «Corrupción política y responsabilidad penal de las personas jurídicas», en Morillas Cueva, L. (dir), *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política*, Madrid, Dykinson, 2021, p. 392, quien indica que «la inclusión de los partidos políticos (...) en el ámbito de las personas jurídicas colaborará sin duda para que los mismos empiecen a cumplir los deberes que objetivamente les competen de persecución de la lacra de la corrupción, tales como el establecimiento de filtros y medidas necesarias para erradicar a los corruptos de sus listas electorales, la creación de protocolos de minimización de riesgos delictivos y códigos de ética y conducta de sus cargos públicos y de sus responsables orgánicos (extendiendo la responsabilidad social corporativa a sus propias organizaciones) y la denuncia y persecución activa de tales conductas en el caso de producirse, en vez de ocultar, silenciar o justificar su existencia».

¹⁷² Vid, en este sentido, Puente Aba, L. M., ob. cit., p. 102, quien afirma que «efectivamente, las críticas a la inicial exclusión de los partidos políticos de este ámbito de responsabilidad, o la posible consideración del efecto autorregulador que esta previsión tendría en la democracia interna y organización de los partidos políticos, pasarán indudablemente por la revisión y adaptación del actual sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, preferentemente configurado pensando en la delincuencia de tipo empresarial». Vid, también, Zugaldía Espinar, J. M., «La responsabilidad criminal de los partidos...», cit., p. 381, quien explica que «la nueva situación legislativa obliga a revisar el catálogo de infracciones penales (...): a) para incluir en el mismo algunas figuras delictivas ya existentes pero que se encuentran fuera de él; b) para incluir en el mismo comportamientos que a partir de ahora deberían elevarse a la categoría de delictivos». Vid, en este sentido, Cugat Mauri, M., «El previsible desajuste de la lista de delitos a la realidad criminológica de los partidos», en Marín de Espinosa Ceballos, E. B. (dir), *El derecho penal en el siglo XXI. Liber amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2021, p. 184, quien afirma que sería aconsejable una revisión del sistema de

5. Conclusiones y propuestas de *lege ferenda*

La incorporación de los partidos políticos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas constituye, a nuestro modo de ver, un hecho muy positivo para el ordenamiento jurídico español. A mi juicio, existía una evidente necesidad político-criminal al respecto, puesto que no podemos olvidar ese continuo fracaso de los tradicionales mecanismos extrapenales de control que se daba sobre este tipo de organizaciones, lo que estaba originando una elevada cantidad de casos de corrupción, un hecho éste que resulta completamente inaceptable dadas esas trascendentales funciones que tienen atribuidos los partidos políticos en nuestro país por mandato constitucional. Además, gracias a ello también se ha posibilitado el que se están implementando en el seno de estas genuinas organizaciones unos «criminal compliances» con los que prevenir delitos vinculados a la corrupción y también todos aquellos que se puedan derivar de su irremediable actividad en el tráfico jurídico, siendo posible ahora, por tanto, anticiparse y detectar a tiempo distintas prácticas delictivas.

No obstante, al analizar a lo largo de estas páginas el actual régimen de responsabilidad penal de los partidos políticos, se ha puesto de manifiesto que, en relación a éste, en realidad, existen importantes déficits y también múltiples lagunas normativas, fruto todo ello de una inadecuada regulación de esta materia. Resulta evidente a nuestro modo de ver, que la extensión genérica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre este particular tipo de entidades, es claramente insatisfactoria por la gran variedad de problemáticas dogmáticas que ello genera. Por ello, existe una urgente necesidad de que en nuestro principal texto punitivo, es decir, en el Código Penal Español se articule un específico modelo de atribución de responsabilidad penal en relación a las organizaciones políticas que tenga en cuenta todas las peculiaridades que éstas presentan.

Así, en primer lugar, *de lege ferenda*, proponemos establecer *un ámbito de aplicación subjetivo especial en el régimen de la responsabilidad penal de las formaciones políticas*. En relación a este extremo, es menester recordar que, según el actual régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la formación política que puede responder de un determinado delito corporativo va a ser aquella que aparezca inscrita en el correspondiente Registro de Partidos, puesto que este órgano administrativo es el que va a determinar la personalidad jurídica, requisito imprescindible en la actualidad para poder imputar responsabilidad criminal. Y a este respecto, entendemos que en el particular caso de un partido político esta

---

responsabilidad penal de los Partidos políticos, que sería bueno que se adelantara a un eventual escándalo político». Vid. también, Quintero Olivares, G., «La responsabilidad penal...», cit., p. 8. Vid., además, Terradillos Basoco, J., ob. cit., pp. 172-173.

solución no es la más adecuada. En este sentido, con el actual modelo, si un concreto ilícito penal es cometido por una «subunidad del partido político» (como podría ser, por ejemplo, una estructura autonómica del mismo que no tenga personalidad jurídica propia), no sería ésta última la que recibiría la sanción penal, sino que lo sería aquella formación política a la que pertenezca aquella según lo que se establezca, como decimos, en el Registro de Partidos. Por ello, proponemos, *de lege ferenda*, que se tipifique expresamente que puedan responder directamente las subdivisiones territoriales de las formaciones políticas o cualquier otro tipo de organizaciones políticas de las reconocidas por el ordenamiento jurídico español, incluidos grupos parlamentarios y municipales. Para ello, todos estos tipos de entidades tendrían que tener la consideración de personas jurídicas, reconociéndose esto expresamente en la regulación penal que se hiciera respecto a este ámbito. De este modo, evitaríamos posibles controversias en la interpretación de esta materia como sí que hemos visto que existe en la actualidad respondiendo del delito aquella específica organización política que lo haya cometido, no afectándose con la medida a aquella parte del partido que no haya tenido nada que ver, dado que muchas de las actuales formaciones políticas españolas vienen caracterizadas por una compleja organización y estructura territorial. Claro está, que ello tendría que venir acompañado de todos aquellos cambios que resulten necesarios a nivel procesal que eviten también los problemas jurídicos que a día de hoy afectan en esta materia, como así ha sido puesto de manifiesto por parte de algún autor.

En segundo lugar, también de *lege ferenda*, proponemos *establecer unos criterios de atribución de responsabilidad específicos en cuanto a cuáles son las personas físicas competentes que podrían realizar el «hecho de conexión»*, pues que, como hemos analizado, con el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se pueden llegar a originar relevantes lagunas de punibilidad. Como mínimo, para evitar cualquier duda interpretativa, habría que incluir y admitirse expresamente como personas físicas competentes para el caso de las organizaciones políticas, por un lado, a representantes y administradores generales según lo dispuesto en la LOREG y también a cargos públicos vinculados con el partido político. Pero, por otro lado, habría que disponer expresamente como personas físicas competentes igualmente a afiliados y militantes, puesto que en la actualidad un sector doctrinal, pone en duda, con razón, que una actuación delictiva por parte de éstos pueda desencadenar la ulterior responsabilidad penal del partido político. En este sentido, podría darse el caso de que determinadas personas que han sido elegidas por el partido político para desempeñar determinados cargos públicos o incluso afiliados puedan actuar en calidad de sujetos activos, por ejemplo, de un delito de financiación ilegal de partidos políticos —posibilidad así sostenida por un amplio sector doctrinal—, siendo declarados finalmente culpables por ello —puesto que será algo frecuente que este tipo de sujetos sean los que terminen realizando este tipo de prácticas

delictivas—. Y, sin embargo, algún juez, de acuerdo con la regulación de ahora, podría considerar que no exista —o no se pueda probar— vínculo adecuado con la organización política —al no cumplir las condiciones de dirigente o subordinado, tal y como actualmente establece el art. 31 bis.1 CP—, quedando el partido político beneficiado impune.

En tercer lugar, igualmente *de lege ferenda*, es necesario a su vez cambios en el «*númerus clausus*» de delitos que por su especial naturaleza podría cometer una determinada formación política, puesto que el actual diseño de los mismos responde a las necesidades de la actividad empresarial pero no a la de las formaciones políticas. Entre los diferentes planteamientos que a este respecto hemos visto que ha realizado la doctrina, nosotros consideramos que lo más adecuado sería excluir determinados delitos para los partidos políticos puesto que podría verse puesto en peligro el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático, como ocurre con los delitos de odio. Pero, a su vez, sería necesario ampliar esta responsabilidad penal a nuevos delitos que a día de hoy no están contemplados, siendo un claro ejemplo de ello los delitos electorales.

En cuarto lugar, *de lege ferenda*, se tendría que producir una profunda revisión del catálogo de sanciones que se les puede imponer a un partido político, puesto que algunas de estas penas entendemos que deberían ser excluidas para éstos. En relación a este extremo, ya hemos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo de investigación, cómo algunas penas resultan muy problemáticas en relación a este tipo de entidades al poder verse afectadas, en caso de imposición, el correcto funcionamiento democrático del país, argumentando, con criterio, algunos autores la posible inconstitucionalidad de las mismas. Pero es que incluso, el que se puedan llegar a imponer como medidas cautelares algunas de estas sanciones penales han sido severamente criticado por un sector doctrinal español que podemos considerar como mayoritario. E incluso el propio art. 66 bis CP, 1^a, relativo a la individualización de la pena de las personas jurídicas, ha sido tildado de inadecuado por parte de algún autor, puesto que este concreto precepto dispone que para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 se ha previsto tener en cuenta «*las consecuencias económico y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores*», pero no, por ejemplo, las «*consecuencias que pudieran producirse para el correcto funcionamiento democrático del Estado de Derecho Penal español*», el hecho de imponer una determinada pena a una organización política. Así, en nuestra opinión, los cambios tendrían que venir dados por excluir en el caso de las formaciones políticas la pena de disolución, la de suspensión de actividades o prohibición de realizarlas en un futuro y la clausura de locales puesto que consideramos que éstas son las medidas más controvertidas por poder tener una incidencia más grave en el correcto funcionamiento democrático español. De hecho, algunas de ellas, como hemos visto, resultan excluidas en determinados países de nuestro entorno. Y es que, en este sentido, no nos termina de convencer esa enor-

me potestad que actualmente tiene el órgano jurisdiccional para poder aplicar o no este tipo de medidas a un partido político, en base a lo establecido en el art. 66 bis. CP. Puesto que es verdad, que este precepto en cuestión obliga a tener en cuenta las «consecuencias económico y sociales» al adoptar estas otras penas diferentes a la multa, pero la aplicación final de las mismas terminará siendo decidida por el tribunal enjuiciador que puede llegar a considerar que el adoptar este tipo de medidas no tiene ningún tipo de consecuencia social, cuando ello en realidad no es así, puesto que determinadas penas, como defendemos, ponen en peligro a nuestro Estado de Derecho. Por ende, consideramos que sólo deberían estar admitidas para las organizaciones políticas la pena de multa, las inhabilitaciones para ellas contempladas en el art. 33. 7. f) CP y la intervención judicial, si bien como hemos argumentando habría que introducir cambios igualmente en el art. 66 bis CP.

En quinto lugar, *de lege ferenda*, nos mostramos partidarios de *establecer unos requisitos mínimos específicos con los que deben de contar los modelos de organización y gestión para los partidos políticos que permita excluir o atenuar la responsabilidad penal de estas organizaciones*. Y es que, en este sentido, las organizaciones políticas cuentan con unas genuinas peculiaridades que no podemos obviar. Éstas desarrollan unas actividades muy particulares por las especiales funciones constitucionales que tienen atribuidas, disponen de sus propias fuentes de financiación, presentan sus propios riesgos delictivos vinculados esencialmente al fenómeno de la corrupción política y se caracterizan, muchas de ellas, por poseer una compleja organización territorial. En consecuencia, elementos tales como exigir determinadas medidas de transparencia, de democracia interna o unos requisitos adicionales en materia de control financiero podrían resultar muy adecuados y útiles a la hora de prevenir delitos en el seno de las formaciones políticas, puesto que el principal riesgo que presentan estas entidades viene dado por los delitos vinculados a la corrupción.

En definitiva, entendemos que se hace necesario el establecer un sistema propio de responsabilidad penal de los partidos políticos que incluya todas las medidas que acabamos de exponer, puesto que con ello se lograría combatir con una mayor eficacia cualquier caso de corrupción que pudiera originarse en estas importantísimas organizaciones, que como sabemos vertebran nuestro sistema social y democrático de derecho.

6. Bibliografía

- I. Astorloa Huarte-Mendicoa, S Sieira Muciantes, «El control electoral de los partidos políticos» en F. J. Matia Portilla (dir.), *Problemas electorales sobre el control de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 145-226.

- J. Barquín Sanz, «Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia», en L. Morillas Cueva (dir.), *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política*, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 323-381.
- J. Baucells Lladós, «Autorregulación y prevención del delito en los partidos políticos», *Revista General del Derecho Penal*, n. 28, 2017, pp. 1-44.
- «Corrupción y responsabilidad penal de los partidos políticos», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 20, 2018, pp. 1-25.
- «La responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas», en M. García-Arán, J. Botella (dirs.), *Responsabilidad jurídica y política de los partidos en España*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018.
- A. Camacho Vizcaíno, J. P. Cortés Labadía, «Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas», *Diario La Ley*, n. 8586, 2015, pp. 1-8.
- Campagna, f, «Corporate Criminal Liability in the Austrian Legal System», en A. Fiorella (edr.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Vol. I. Liability «ex crimine» of Legal Entities in Member States*, Napoli: Jovene Editore, 2012, pp. 441-462.
- M. Cugat Mauri, «La reforma de responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel del juez ante el peligro de hipertrofia de los compliance», *Estudios penales y Criminológicos*, vol. XXXV, 2015, pp. 919-963.
- «El previsible desajuste de la lista de delitos a la realidad criminológica de los partidos», en E. B. Espinosa Ceballos (dir.), *El derecho penal en el siglo XXI. Liber amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2021, pp. 167-185.
- L. E. Delgado Del Rincón, «Hacia un modelo idóneo de control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas», en F. J. Matia Portilla (dir.), *Problemas actuales sobre el control de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 423-470.
- B. Del Rosal Blasco, «Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas» en L. Morillas Cueva (dir.), *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política*, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 383-396.
- A. L. De Pablo Serrano, «La responsabilidad penal de los partidos políticos: delitos, penas y Compliance Programms», en F. J. Matia Portilla (dir.), *Problemas actuales sobre el control de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 341-385.
- A. Del Moral García, «Responsabilidad penal de partidos políticos» en *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín*, Madrid, Fiscalía General del Estado, 2018, pp. 299-318.

- P. Donaires Sánchez, «Responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho comparado», *Derecho y Cambio Social*, Año 10, n. 31, 2013, pp. 1-22.
- P. Faraldo cabana, «La disolución de partidos políticos como sanción penal», *Estudios Penales y Criminológicos*, n. 28, 2018, pp. 98-130.
- J. G. Fernández Teruelo, *Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención a través de un modelo de organización y gestión (compliance)*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2020.
- A. Gálvez Jiménez, «Prevención del delito y planes de cumplimiento en el marco de los partidos políticos», en L. Morillas Cueva (dir.), *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política*, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 397-416.
- J. Gimeno Beviá, «Problemas que plantea el enjuiciamiento penal de los partidos políticos», *Revista General de Derecho Procesal*, n. 43, 2017, pp. 1-23.
- C. Gómez-Jara Díez, «Sujetos sometidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas», en *Responsabilidad penal de las personas jurídica. Aspectos sustantivos y procesales*, Madrid, La Ley, 2011, pp. 51-61.
- M. Gómez Tomillo, *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, 2ª ed., Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2015.
- J. L. González Cussac, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020.
- J. León Alapont, «¿A qué «partido político» imputar y eventualmente condenar?», *Revista Penal*, n. 40, 2017, pp. 146-167.
- «La primera imputación de un partido político en España ex artículo 31 bis del Código Penal», *Diario La Ley*, n. 9107, 2017, pp. 1-13.
- «El delito de financiación ilegal de los partidos políticos desde la perspectiva de la responsabilidad penal de éstos como personas jurídicas», *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, n. 4, 2018, pp. 1-36.
- «Partidos Políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas: consideraciones en torno a su régimen jurídico y los compliance programs», en A. Matallín Evangelio (dir.), *Compliance y prevención de delitos de corrupción*, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 153-192.
- *La responsabilidad penal de los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019.
- *Compliance penal. Especial referencia a los partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020.
- B. Macias Espejo, «La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como

- instrumento de prevención de delitos», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 139, 2020, pp. 75-112.
- E. B. Marín de Espinosa Ceballos, *Criminalidad de empresa. La responsabilidad penal en las estructuras jerárquicamente organizadas*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002.
- «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso Bankia», *La Ley Penal*, n. 102, 2013, pp. 1-16.
- M. Maroto Calatayud, *La financiación ilegal de partidos políticos: Un análisis político-criminal*, Madrid, Marcial Pons, 2015.
- «Autorregulación y legitimidad corporativa: Democracia interna y control social en partidos políticos y empresas», en L. Arroyo Jiménez, A. Nieto Martín (dirs.), *Autorregulación y sanciones*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi Thomson Reuters, 2015, pp. 369-418.
- J. M. Maza Martín, *Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos*, Madrid, Editorial La Ley, 2018.
- F. Mazzacuva, «Funciones y requisitos del modelo organizativo en el ordenamiento jurídico italiano: el problema del juicio de adecuación», en J. M. Palma Herrera (dir.), *Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica*, Madrid, Dykinson, 2014, pp. 69-88.
- M. A. Morales Hernández, «Los criterios jurisprudenciales para exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas en el delito corporativo», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 19, 2018, pp. 327-368.
- «El transcendental papel de la jurisprudencia en la construcción de una teoría jurídica del delito aplicable a personas jurídicas», *La Ley Penal*, n. 133, 2018, pp. 1-12.
- «Particularidades en materia de autoría y participación en los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos», *La Ley Penal*, n. 149, 2021, pp. 1-21.
- «Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia, Alemania y Reino Unido: propuestas de lege ferenda en relación a la legislación penal española», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 136, 2022, pp. 271-306.
- «Propuesta de «criminal compliance» para partidos políticos españoles: su adaptación al artículo 31 bis.5 del Código Penal», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 24, 2022, pp. 1-47.
- L. Morillas Cueva, «La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», *Anales del Derecho*, n. 29, 2011, pp. 1-33.
- E. Núñez Castaño, «Sobre la legitimidad de la tipificación penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos en el marco de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción», en M. C. Gómez Rivero, A. Barrero Ortega (dirs.), *Regeneración democrática y*

- estrategias penales en la lucha contra la corrupción*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 731-789.
- J-C. Planque, *La détermination de la personne morale pénalmente responsable*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- M. Poelemans, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso francés», *Eguzkilore: Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología*, n. 28, 2014, pp. 113-124.
- L. M. Puente Aba, *El delito de financiación ilegal de partidos políticos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017.
- G. Quintero Olivares, «La responsabilidad penal de los Partidos como personas jurídicas», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, n. 859, 2013, pp. 1-5.
- «Título II. De las personas criminalmente responsables de los delitos», en G. Quintero Olivares (dir.), *Comentarios al Código Penal Español. Tomo I (Artículos 1 a 233)*, 7ª ed., Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 345-411
- G. Quintero Olivares, M. T. Franquet Sugañes, «Lección 10. Estado, mercado y Constitución: la dimensión penal» en G. Quintero Olivares (dir.), *Derecho penal constitucional*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, pp. 493-542.
- F. J. Rodríguez Almirón, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas a raíz de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo», *Revista Aranzadi Doctrinal*, n. 6, 2017, pp. 1-23.
- J. C. Sandoval Coronado, «Capítulo VII. Apuntes sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos, la corrupción política, y la disolución de la persona jurídica», en C. Juanatey Dorado, N. Sánchez-Moraleda Vilches (dirs.), *Derechos del condenado y necesidad de pena*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi Thomson Reuters, 2018, pp. 141-172.
- D. M. Santana Vega, «Consideraciones críticas sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos como instrumento de lucha contra la corrupción», en J. Rodríguez-Drincourt (dir.), *Transparencia, profundización democrática y lucha contra la corrupción*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2019, pp. 313-344.
- S. Seminara, «Compliance y Derecho penal: la experiencia italiana», en S. Mir Puig, M. Corcoy Bidasolo, V. Gómez Martín (dirs.), *Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción penal*, Madrid: Edisofer, 2014, pp. 127-160.
- J. Terradillos Basoco, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», en F. J. Álvarez García (dir.), *Estudio Crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 171-178.

- J. Valls Prieto, «Las exenciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿son responsables los partidos políticos y los sindicatos?», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 104, 2011, pp. 109-128.
- J. M. Zugaldía Espinar, *La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones.*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2008.
- «Societas delinquere potest: análisis de la reforma operada en el Código Penal español por la LO 5/2010, de 22 de junio», *La Ley Penal*, n. 76, 2010, pp. 1-12.
- *La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin personalidad y de sus directivos. Análisis de los arts. 31 bis y 129 del Código Penal*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013.
- «La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 11, 2014, pp. 365-384.
- «Modelos dogmáticos para exigir la responsabilidad criminal a las personas jurídicas (a propósito de las SSTs de 2 de septiembre de 2015, 29 de febrero de 2016 y 16 de marzo de 2016)», *La Ley Penal*, n. 119, 2016, pp. 1-7.
- «Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión», *Cuadernos de Política Criminal*, n. 121, 2017, pp. 9-34.